



## La revolución centroamericana

### I. El contexto y la escalada imperialista

1. Hace un cuarto de siglo se abría una nueva etapa de la revolución mundial con la victoria de la revolución socialista en **Cuba**. El imperio norteamericano sufrió entonces una primera fisura. La conquista del poder por el New Jewel Movement y el establecimiento de un gobierno revolucionario (marzo 1979) en **Granada** abren una nueva brecha. Granada establece, entonces, un vínculo de unión revolucionaria entre la parte hispanoparlante y anglófona de este conjunto que forma la cuenca del Caribe. La conquista del poder (julio 1979) por el FSLN en **Nicaragua** inaugura una nueva fase de este proceso revolucionario de largo alcance en esta región estratégica crucial para los Estados Unidos. El derrocamiento de Somoza constituye una derrota para la presencia norteamericana, que históricamente había adoptado la máscara de la Guardia Nacional y de la dictadura somocista. La revolución en **El Salvador** concentra hoy, en su forma más aguda, el enfrentamiento entre las clases en la región. Las luchas revolucionarias y de masas en los demás países de América Central (sobre todo Guatemala) y del Caribe (República Dominicana, Haití, Ja-

maica) se inscriben dentro de esta dinámica que pone en tela de juicio radicalmente el sistema de dominación de los Estados Unidos y favorece la **extensión de la revolución socialista**.

La revolución centroamericana está profundamente marcada, en todos sus aspectos, por su inserción geopolítica. Adquiere su impulso en países estrechamente subordinados al imperialismo, y cuyos regímenes políticos son creaciones de los Estados Unidos. Los Estados surgidos de las revoluciones socialistas victoriosas —como Cuba y Nicaragua— son los primeros Estados nacionales realmente independientes que cristalizan las aspiraciones históricas de autodeterminación de estas naciones oprimidas y las reivindicaciones de las masas explotadas. Estas revoluciones chocan con la contrarrevolución imperialista en esta **zona de seguridad** de los Estados Unidos. De ahí el lugar clave que ocupa la revolución centroamericana en los combates entre las clases a escala internacional.

2. Pocas regiones son hasta tal punto **objeto** de la política exterior de una potencia imperialista como lo son América Central y el Caribe. Desde hace 85 años son teatro de intervenciones permanentes de los Estados Unidos, que siempre han reivindicado el **derecho** de

dictar su ley en ellas. Consideran esta zona como parte integrante de su "sistema de seguridad". Disponen en ella de una cuarentena de **bases militares**. Y construyen nuevas, entre otras en el lado hondureño del Golfo de Fonseca, entre Nicaragua y El Salvador. En 1982-1983, el 20% del total del presupuesto militar norteamericano estaba destinado a esta región.

Este área es una zona de paso, así como un lugar de transbordo y refinado del petróleo (de Alaska y Oriente Medio) destinado a los Estados Unidos. Es una arteria comercial muy importante, tanto para la costa atlántica como para la pacífica (canal de Panamá). Está salpicado de plazas financieras "off shore" (Panamá, Islas Caimán, Bahamas) de primer rango.

Cuenta con reservas petrolíferas, de gas y otras materias primas. El Plan Reagan para la "Cuenca del Caribe"—que incluye a los Estados Unidos—tiene por objeto utilizarla como plataforma para una industria ávida de mano de obra barata. Washington y Wall Street quisieron imponer en ella, sólo que a mayor escala, un modelo de desarrollo al estilo de Puerto Rico. En la "Caribbean Central American Action", dirigida por D. Rockefeller, se agrupan un centenar de empresas importantes. Este organismo presta todo su apoyo a la política de Reagan. Sin embargo, los intereses económicos **directos** del imperialismo (inversiones) son relativamente escasos en comparación con los intereses **estratégico-militares**.

El imperialismo norteamericano reivindica una "hegemonía absoluta" en esta parte del mundo, con el consentimiento de las burguesías imperialistas. No perder ni compartir su supremacía es para él una prueba de **credibilidad internacional**. El actual ascenso revolucionario amenaza por tanto al imperio norteamericano en su coto privado. Y los problemas del "patio trasero" están convirtiéndose en problemas domésticos, aunque sólo sea por el hecho de que el 10% de la población de esta región vive en los Estados Unidos.

El **atractivo** de la revolución nicaragüense, después de la cubana, se basa entre otras cosas en que demuestra que es posible quebrar la preponderancia norteamericana en las zonas más próximas a la metrópolis imperial. Es más, pese a todas las dificultades provocadas por el Pentágono, estas revoluciones, apoyándose en la movilización popular, han sabido empezar a responder rápidamente a las necesidades ele-

mentales de la mayoría del pueblo. Mientras, los países del **Cono Sur** sufren un desastre económico; que acelera la depauperación de amplísimas capas de la población y suscita una crisis política de los regímenes constituidos. Todo ello contribuye a estrechar los lazos entre la lucha de clases en América del Sur y la revolución centroamericana, lo que acentúa la importancia de los enfrentamientos actuales.

3. El relanzamiento de la revolución en el Caribe tiene lugar, a diferencia de la revolución cubana, en un periodo de crisis económica prolongada del imperialismo norteamericano y de declive de su hegemonía, reflejada en la derrota sufrida en Vietnam y en el derrocamiento de uno de sus aliados estratégicos, el sha de Irán. De este modo, la revolución centroamericana se convierte en el punto de mira de una **contra-ofensiva** imperialista de calibre. La respuesta emprendida, tras la victoria del FSLN en julio de 1979, es una faceta de esta **política global**: el ataque brutal al nivel de vida de los trabajadores en los Estados Unidos, la remilitarización vertiginosa y las presiones intensificadas frente a la Unión Soviética, el refuerzo de la capacidad de intervención militar con miras a sofocar toda tentativa de avance revolucionario en los países dominados, cuyas economías, dicho sea de paso, están sometidas al supremo control del FMI.

De hecho, fue Carter quien inauguró esta política de **crisis** y de **guerra**. La administración demócrata había sufrido una serie de reveses en sus intentos de establecer un régimen sin Somoza, pero apoyado en la Guardia Nacional. Trató de que la Organización de Estados Americanos (OEA) avalara una intervención contrarrevolucionaria **directa**, con el fin de ampliar su base de apoyo en los Estados Unidos y a escala internacional. Por primera vez, la OEA denegó su apoyo.

El imperialismo sacó muy pronto las lecciones de ello. Pasará a dar mayor peso a las **subalianzas militares regionales**.

A partir del otoño de 1979, Carter orquesta el golpe de Estado de Romero en El Salvador, incrementa la ayuda militar a Honduras y El Salvador, prepara las condiciones para hacer de Honduras y Costa Rica las futuras bases de intervención contra la revolución nicaragüense, asegura la supervivencia y el entrenamiento de la Guardia Nacional de Somoza, refuerza la presencia de los **marines** en la zona y dirige el derroca-

miento de Manley en Jamaica, aunque enmascarando la operación tras unas elecciones. Proliferan las amenazas contra Cuba.

Desde 1980-1981, el rumbo belicista del Pentágono se acentúa aún más. Sus componentes son los siguientes:

a) Una reorganización de las fuerzas de policía y del ejército salvadoreño. Este último queda bajo la tutela del Estado Mayor norteamericano. Se intensifica la intervención de los "consejeros USA", a nivel de información, vigilancia aérea, mantenimiento del material militar sofisticado y también del mando de operaciones militares sobre el terreno. No cabe duda de que sin la ayuda y el encuadramiento por parte de los Estados Unidos, el ejército salvadoreño se habría hundido bajo el efecto de las ofensivas militares del FMLN.

b) La proliferación de maniobras militares conjuntas entre los Estados Unidos, Honduras y El Salvador. Se desarrollan en el golfo de Fonseca, en Honduras (junto a la frontera de Nicaragua y El Salvador), e incluso algunas tendrán lugar en territorio salvadoreño. Estas maniobras están destinadas a forjar **alianzas militares regionales**, ingrediente necesario para utilizar directamente un mayor número de fuerzas norteamericanas. Su importancia se deriva del fracaso del intento imperialista de "latinoamericanizar" la guerra en América Central. Este proyecto pretendía apoyarse en fuerzas armadas como la de Argentina. Se hizo trizas al chocar con el doble escollo de la guerra de las Malvinas y de la crisis de las dictaduras del Cono Sur. Con motivo de la intervención contrarrevolucionaria en **Granada**, los Estados Unidos inauguran la utilización de estas subalianzas militares regionales. A la sazón, también les permiten crear una nueva fuerza de "vigilancia" en la región.

c) **Honduras** se convierte en un auténtico "portaaviones" norteamericano. Allí hay estacionados permanentemente más de 2.000 soldados, sin contar las fuerzas de la CIA que encuadran a las de la contrarrevolución nicaragüense. La base de **Palmerola**, capaz de recibir todo tipo de aviones de guerra, es el centro estratégico del dispositivo de guerra de los EEUU. Diez aeropuertos militares completan el "sistema de defensa" de Honduras. Desde hace varios meses funciona un centro de preparación para las tropas salvadoreñas y hondureñas, con capacidad para dar instrucción a

1.500 soldados. Finalmente, se ha creado un sistema de vigilancia por radar, necesario para dirigir una ofensiva aérea contra Nicaragua y para sobrevalorarla permanentemente. El peso de la intervención norteamericana provoca un proceso de descomposición-corrupción en las estructuras de poder. Combinada con el peligro de una guerra rechazada por las masas y la crisis económica, suscita también reacciones populares. Pero estas difícilmente encuentran una expresión independiente en el plano político, dada la debilidad de las fuerzas políticas revolucionarias. Surgen conflictos entre sectores del poder civil y la jerarquía militar, que a su vez tampoco está libre de conflictos internos. La presencia de varios ejércitos (desde los contras hasta las tropas norteamericanas, pasando por las tropas salvadoreñas que se entrenan en Honduras) constituye otro factor de inestabilidad. Los círculos dirigentes del ejército dependen totalmente de los Estados Unidos, pero pretenden negociar esta ayuda en beneficio de sus propios intereses. Asimismo desean mantener una posición de fuerza frente a otros ejércitos de la región, como el de El Salvador.

En una etapa posterior, el imperialismo norteamericano intentará reforzar sus posiciones militares en Costa Rica.

d) La CIA financia, instruye y encuadra a un auténtico **ejército contrarrevolucionario** en Costa Rica y Honduras. Cuenta con más de 15.000 hombres, y una parte se compone de antiguos miembros de la Guardia Nacional somocista. Estos mercenarios han emprendido una auténtica **guerra contra Nicaragua**, cuyo coste humano y material es muy elevado.

e) En el Caribe, la flota norteamericana mantiene una presencia continua, además de realizar importantes maniobras de guerra (*Ocean Venture*). Se ha iniciado la reorganización de las fuerzas de policía y militares de los Estados caribeños. Se construye una fuerza militar multinacional (Dominica, Antigua, Santa Lucía, etc.), con el fin de "prevenir cualquier nuevo Granada".

f) Washington recurre a **Israel** para ampliar sus esfuerzos de guerra en la región. El Estado sionista desempeña un papel de primera fila en el armamento y entrenamiento de las fuerzas represivas de Guatemala. Es un proveedor privilegiado de armas avanzadas a las dictaduras de la región. Sus instructores actúan en El Salvador, Honduras, Costa Rica y entre los

"contras". También Taiwán participa en el esfuerzo contrarrevolucionario, financiando a los mercenarios antisandinistas y armando e instruyendo a las fuerzas armadas de Guatemala.

g) La **ocupación de Granada** por las tropas norteamericanas pretendía señalar a los movimientos revolucionarios de la región —al igual que a los aliados de EEUU— cuáles son los objetivos reales de Washington. Asimismo, quería demostrar que frente al despliegue de las fuerzas aeronavales de los Estados Unidos, los combatientes revolucionarios no pueden esperar ninguna ayuda al mismo nivel. Con razón, Fidel Castro subrayó que para disuadir estas agresiones y en su caso ofrecerles resistencia, las revoluciones en curso deben nutrir sus fuerzas de la capacidad de movilización, de preparación de las masas, y de las fuerzas revolucionarias, del valor de su dirección. Es esto lo que elevará al máximo el precio que deberá pagar el imperialismo por una acción de este tipo, y lo que podría facilitar cierta ayuda por parte de las fuerzas revolucionarias de la región, lo que el curso de la revolución en Granada hizo imposible.

h) A partir de 1981, y para legitimar nacional e internacionalmente una intervención directa, la administración Reagan viene elaborando una doctrina que se alimenta de viejas recetas. En primer lugar, pretende que en América Central los Estados Unidos se enfrentan a la URSS. Además, el FMLN pretendidamente sólo existe gracias al apoyo masivo que recibe de la coalición soviético-cubana, a través de Nicaragua. De hecho, El Salvador sería víctima de una "*agresión exterior*". Finalmente, la caída de El Salvador abriría las puertas a la "*penetración rusa*" hacia Guatemala y, en el día de mañana, México. Frente a estos peligros, los Estados Unidos tienen el deber de combatir esa "*expansión rusa*". La política norteamericana en esta región del mundo no es más que un elemento del conflicto "*Este-Oeste*".

Este es el esquema en que el Pentágono y Reagan sitúan sus maniobras diplomáticas, cuyos objetivos son domésticos e internacionales, pero que inciden también en las luchas actuales en América Central. En la tradición de la política imperialista norteamericana, **organizan elecciones** y algunos remozamientos de fachada democráticos, como por ejemplo en El Salvador y Guatemala. Con ellas pretenden legitimar el incremento de la ayuda militar o una intervención directa para "*salvar la*

*democracia*". Constituyen asimismo un intento de última hora para frenar las crisis de dirección burguesa. Finalmente, está también la voluntad de utilizarlas con el fin de abrir brechas en el frente antiimperialista y antidictatorial y provocar cierta desorientación en sectores de la población.

4. Ello no debe ocultar lo fundamental. Para el imperialismo norteamericano, como lo declara sin ambages el informe bipartito Kissinger, el Estado obrero cubano y Nicaragua con **anomalías** en esta "*periferia interna*" (*internal periphery*). Es preciso ponerles límites de inmediato, y si es posible, suprimirlas. Este objetivo fundamental es aceptado por todas las fuerzas burguesas en los Estados Unidos. Estas pueden discrepar, en base a consideraciones propias de la situación interior de los Estados Unidos, en cuanto al equilibrio de los medios a emplear: presiones de todo tipo y agresión directa. Pero están de acuerdo en torno a la necesidad de impedir a todo precio la victoria de la revolución salvadoreña, la consolidación de la revolución y del Estado nicaragüense y de infligir una derrota profunda a la guerrilla guatemalteca.

**Tiene planeada una auténtica escalada.** Sus diversas etapas deben permitir ahora a Nicaragua, consolidar política y militarmente el poder establecido en El Salvador y utilizar esta gigantesca presión para tratar de debilitar militar y políticamente a las fuerzas revolucionarias. Algunos países europeos (CEE) y latinoamericanos (Venezuela e incluso México) emplean actualmente el arma económica para doblegar a Nicaragua. Su apoyo al régimen de Duarte en El Salvador va en el mismo sentido. La inclusión de las burguesías europeas y latinoamericanas, al igual que de la socialdemocracia internacional, tiene un doble objetivo: diversificar las fortísimas presiones sobre las fuerzas revolucionarias y sobre quienes son susceptibles de ayudarles a uno u otro nivel; amortizar el coste político para Washington de un salto cualitativo en la presencia directa de las tropas imperialistas.

Se ha iniciado ya la **primera fase de una guerra contrarrevolucionaria** en América Central. El conjunto de la estrategia del Pentágono está destinado a recuperar la hegemonía total en la cuenca del Caribe, como parte integrante de la **contraofensiva global del imperialismo norteamericano**. De ahí la particularidad del combate desarrollado por

el FMLN en comparación tanto con el Movimiento 26 de Julio en Cuba como con el FSLN en Nicaragua, que tuvieron que hacer frente a la agresión imperialista **después** de la conquista del poder. De ahí el alcance excepcional de lo que está en juego en Nicaragua y en El Salvador.

De ello se deriva para los trabajadores y los revolucionarios del mundo entero, para los que luchan contra el esfuerzo de remilitarización imperialista, la importancia primordial de prestar su ayuda a la victoria de los movimientos revolucionarios de América Central y del Caribe y de asegurar la defensa incondicional de Cuba y Nicaragua.

## II. Características y carácter de la revolución

1. En el istmo centroamericano, los dominados de siempre ya no aceptan ser dominados. Una de las raíces de su revuelta, desde comienzos de los años setenta, estriba en el **deterioro considerable de su nivel de vida**. Esto encuentra su eco en las aspiraciones políticas siempre frustradas, derechos democráticos permanentemente violados, problemas sociales no resueltos, acumulados durante un largo periodo.

En apenas treinta años, la población de América Central se ha triplicado con creces. Más del 45% tiene menos de 14 años. Las clases dominantes consideran a la parte fundamental de esta juventud como un peligro en tanto que tal. Somoza o los militares de Guatemala han dado la prueba más explícita de ello.

Al **subempleo se suma el paro**. El paro total ha aumentado vertiginosamente desde finales de los años setenta. El desarrollo económico de los años sesenta y comienzos de los setenta ha acentuado aún más la extrema **diferenciación** en la distribución de los beneficios. Cerca del 65% de la población vive en un *"estado de miseria"*; el 40%, en un *"estado de miseria extrema"* (el 57% en El Salvador). Subalimentación, desnutrición, elevada mortalidad infantil, analfabetismo, falta de acceso generalizada a las infraestructuras básicas (agua, luz, etc.), enfermedades endémicas, todo ello es el fardo cotidiano de esta amplia mayoría que hoy lucha contra el imperialismo, sus regímenes y dictaduras más o menos enfeudadas.

Bajo los efectos de la crisis agraria y de la industrialización, la **población ur-**

**ba** ha aumentado rápidamente, con concentraciones proletarias y semiproletarias en los barrios populares de las principales ciudades, ante todo en la capital. El número de **estudiantes** ha crecido vertiginosamente en 15 años. Constituyen una fuerza social y política que desempeñará un papel importante en las luchas políticas y en el desarrollo de organizaciones revolucionarias. La **población rural**, sin embargo, sigue siendo importante, mayoritaria: más del 55% de promedio, con un peso especial en Guatemala, El Salvador y Honduras. La fuerza de trabajo rural sigue creciendo, comportando un aumento del subempleo. Bajo el impacto de la transformación en la agricultura se han formado concentraciones geográficas regionales. Toda esta *"masificación"* urbana y rural subyace a las luchas populares.

Los contragolpes de la crisis internacional del capitalismo en estas frágiles economías, deformadas y dependientes, las sumergirán en el **marasmo económico más grave de su historia**. Entonces se conjugan los efectos de la *"modernización capitalista"* con la crisis en países con una amplia base agraria, pero que tienen una población recién urbanizada y altamente subempleada. El nivel de vida de las masas urbanas va de mal en peor, se acelera el empobrecimiento de los pequeños campesinos, del semiproletariado y del proletariado agrícola; la pequeña y media burguesía tampoco se salvan. La totalidad del edificio social se ve sacudido.

2. La **perturbación del sistema de dominación oligárquico** resultará ser un elemento que favorece los procesos revolucionarios. Las oligarquías en el poder, que forman parte de la *"modernización"* económica se transforman parcialmente y conocen de este modo diferenciaciones a veces generadoras de tensiones internas, incluso en las filas de los ejércitos, que a veces han sido un factor de dichas transformaciones. Estas oligarquías son incapaces de responder a los efectos sociales y políticos generados por el crecimiento económico (extensión de las relaciones de producción capitalistas, destrucción de las estructuras sociales precapitalistas, crecimiento de las *"capas medias"* urbanas, implantación de las multinacionales, etc.). El Mercado Común Centroamericano (MCCA) impulsa estas transformaciones y, a pesar de su crisis, que aparece a partir de finales de los años 60, acelera los intercambios eco-

nómicos y un relativo crecimiento. Los efectos sociopolíticos de este crecimiento-modernización sobrepasan su importancia puramente económica. En este terreno, sigue siendo parcial, superficial y distorsionado. En la agricultura sólo afecta al sector exportador, con una concentración de la propiedad terrateniente. Se agrava la situación de la agricultura vinculada al mercado interior (productos alimenticios). La industria duplicará su participación en el PIB en 15 años. Sin embargo, sigue siendo muy frágil y no altera el peso predominante de la exportación agrícola.

Las oligarquías no pueden perpetuar simplemente el antiguo sistema de dominación (Costa Rica es una excepción en este marco general). Las **luchas interburguesas** se multiplican y se expresan incluso en el **interior del Estado burgués** (golpes de Estado en Guatemala, conflictos en El Salvador en 1976 en torno a la reforma agraria del general Molina; los choques son más fuertes y constantes en Nicaragua a partir de 1975). Pero estas oligarquías, que tienden a monopolizar el poder en el seno de la clase burguesa, son incapaces de establecer un nuevo sistema de alianzas y un reordenamiento institucional adecuado para consolidar su hegemonía.

A su vez, todos los **proyectos reformistas**, que a menudo se apoyan en sectores de las *"clases medias"* y profesionales liberales, son muy efímeros, y sucumben ya a los golpes de Estado militares, ya a las involuciones autocríticas (en 1966 en Guatemala, con Julio César Menéndez Montenegro; en 1972 en El Salvador, donde la Democracia Cristiana y Duarte se ven privados de su victoria electoral, y posteriormente en 1977; en 1967, y más tarde, en 1972-73, con el pacto liberal-conservador en Nicaragua). Las *"fuerzas renovadoras"* temen a las masas como a la peste, y casi siempre ponen fin a su rebelión al amparo de transacciones con la oligarquía, el ejército y el imperialismo. Este conserva siempre a los sectores oligárquicos como **aliado**.

Los regímenes establecidos muestran una incapacidad estructural para controlar el ascenso del movimiento de protesta popular. No pueden crear canales susceptibles de contenerlo, ni siquiera parcialmente. Ello acentúa por tanto la inestabilidad político-social. Este poder oligárquico devalúa completamente los componentes de la democracia burguesa (parlamento, elecciónes

fraudulentas, poder judicial independiente, libertad de prensa...).

Es sintomático que estas oligarquías y sus propios aliados recurren, para expresar sus intereses, más a las organizaciones patronales y profesionales que a los partidos políticos, cuya utilidad es transitoria, pues se limita a los fraudes electorales. Su ideología de *"sacrificio del progreso al orden"* no tiene otra trama que el anticomunismo, lo que revela su debilidad histórica y su indigencia, aunque están armadas hasta los dientes.

El recurso al **terrorismo de Estado** y a la **dictadura militar** —que recibe la bendición de la jerarquía católica hasta el momento en que se abre la crisis más aguda del régimen— aparece como la respuesta privilegiada de los que están en el poder para responder a las dificultades de reorganización de la dominación de clase y al surgimiento de las luchas populares. Ello no excluye operaciones más combinadas (políticas y represivas), como puede observarse en Honduras, o en la coyuntura actual en Guatemala y El Salvador. Sin embargo, se insertan en la política de *"seguridad nacional"* (**contrainsurgencia**) que han desarrollado en especial los militares guatemaltecos.

Estas líneas maestras señaladas permiten calibrar las **diferencias** existentes entre las condiciones de la lucha revolucionaria en América Central (una vez más, con la excepción de Costa Rica) y las de numerosos e importantes países de América Latina, donde las clases dominantes poseen otros recursos y pueden jugar la carta de una *"apertura controlada"*, por muy precaria que sea.

3. La intervención permanente del imperialismo en esta región ha creado un obstáculo para la formación de burguesías nacionales con una base sólida. Es cierto que, en el marco de la política de la *"Alianza para el Progreso"*, entre otros, y de un relativo desarrollo económico, estas burguesías se han consolidado un poco. Pero no dejan de ser fuerzas sociales cuyo proyecto propio, nacional e histórico, es muy frágil, lo que ha puesto de relieve tanto la crisis como el ascenso revolucionario a partir de 1979. La consolidación de sus ejércitos e incluso una política militar que les confiere cierta posibilidad de negociar con los Estados Unidos (Guatemala), no alteran sustancialmente estos rasgos fundamentales. Su carácter *"monopolista"* (control de lo fundamental de la riqueza —sobre todo la propiedad terrateniente— por

algunas familias y militares recién ascendidos) y su subordinación-asociación al imperialismo norteamericano hacen que la represión sistemática sea un elemento clave de su modo de dominación. Su política económica, más allá de la **sobreexplotación** y de la asociación con el capital imperialista, se reduce a menudo a la fuga de capitales. La coyuntura actual lo demuestra claramente. "*Sacrifican*" sus intereses futuros de clase a las estrechas exigencias del momento, lo que pone de relieve su parasitismo. Son "*vendepatrias*" hasta los huesos, al tiempo que pretenden encarnar el futuro de la nación.

Corresponde por tanto a las masas populares, al pueblo, a las clases dominadas, **llevar a término la formación de la nación y del Estado nacional efectivamente independiente**. Por lo demás, es en el seno de la amplia dinámica social-nacional donde puede constituirse la mayoría popular necesaria para la victoria de la revolución y que posteriormente se ampliará aún más gracias a esta victoria. Es esta una de las grandes lecciones del combate del sandinismo contra el somocismo.

4. Las fuerzas populares en América Central extraen su fuerza de un pasado de lucha que ha forjado, en los años treinta, las grandes figuras del combate antiimperialista, de liberación nacional y social: Sandino y Farabundo Martí. La experiencia del cardenismo y de sus reformas en México también ha dejado su impronta. Finalmente, el periodo del gobierno Arbenz (1950-1954) en Guatemala forma parte de su legado, como factor revelador de los límites de una reforma agraria burguesa y motor de intensas movilizaciones de masas.

Sin embargo, más allá de estas referencias históricas importantes, su carácter les viene dado por la **realidad actual y los objetivos que se proponen**.

Con diferencias según los países, desde comienzos de los **años setenta** las luchas de masas atravesarán una serie de etapas que desembocan en el enfrentamiento militar abierto.

A partir de 1972-1973, la inflación empieza a mermar los ingresos. La radicalización alcanza a sectores de la población como los enseñantes, universitarios, empleados de banca, de la seguridad social, de los hospitales. Los sindicatos amplían su radio de influencia y proliferan las huelgas obreras. Los "*pobladores*" entran en movimiento y se organizan. Los campesinos reclaman tierras y las ocupan, acto de desobe-

diencia civil por excelencia y ruptura con la ideología de la sumisión y del fatalismo. La entrada en la escena política de los campesinos comporta una fractura que ya no será reabsorbida. Las organizaciones revolucionarias acumulan fuerzas. Los empujes reivindicativos, hasta 1977-1978, se expresan abierta y a veces incluso legalmente.

**Nuevos actores** se suman al cortejo de la revuelta popular: los cristianos, laicos y curas opuestos a la jerarquía ("*comunidades de base*"); los indios en Guatemala, que constituyen el grueso del campesinado pobre; las organizaciones de mujeres y asociaciones de familiares de presos políticos y desaparecidos.

Durante estos años, el lamentable fracaso del reformismo burgués **mina la credibilidad de las posibilidades de lucha en el terreno legal**.

Desde 1978, las luchas abiertas y clandestinas, legales e ilegales, se entremezclan mucho más (ocupaciones de fábricas, de solares urbanos, de tierras, con autodefensa y acciones armadas). La **represión** se recrudece. Militantes, dirigentes sindicales, estudiantes, campesinos y obreros son secuestrados y asesinados por millares. El terror es tan omnipresente que aparece una nueva categoría social: los **refugiados políticos** en el país o junto a sus fronteras. Ilustran más que nada la precariedad de las condiciones de vida de los desfavorecidos de toda la región.

Sobre la base de sus experiencias, las masas trabajadoras comprenden cada vez más que los combates más elementales por sus derechos democráticos, sociales y económicos se transforman en **enfrentamientos políticos con el poder establecido**. El **derrocamiento de las dictaduras** aparece como la condición para introducir cualquier reforma mínimamente sustancial. Se establece una **convergencia** entre las luchas de los diversos sectores sociales y las organizaciones político-militares que se han afirmado como fuerzas dirigentes del combate de los explotados y oprimidos. **Insurrecciones de masas, movimientos populares armados y guerra popular** —que toma el sentido de una guerra de clase— se convierten en la **expresión necesaria del enfrentamiento social**. Las insurrecciones populares en Nicaragua que desembocan en la destrucción del aparato de Estado somocista (1979) y las gigantescas movilizaciones de masas urbanas en El Salvador (1980) marcan un **hito**.

La **consolidación de la revolución sandinista**, de su Estado, de su ejército, el comienzo de una **guerra civil** en El Salvador y la **intervención política y militar** directa de los Estados Unidos crearán un nuevo marco para el desarrollo revolucionario en la región.

5. La dinámica de esta revolución no es producto de un determinismo social, si bien en un país como El Salvador la estructura de clases agudiza el alcance anticapitalista de las luchas populares.

Resulta incomprensible sin la **existencia de organizaciones revolucionarias —político-militares—** que se construyeron en el transcurso de los años sesenta y comienzos de los años setenta, dotándose del **objetivo explícito de la conquista del poder**.

Estas organizaciones captan el legado **comunista** y marxista de lo que hay de mejor en América Central y las tradiciones del **combate de liberación nacional y antiimperialista**. Son el producto de una larga historia. Han demostrado ser capaces de hundir sus raíces en lo más profundo de la realidad nacional. Esto y su vinculación inquebrantable con la revolución cubana bastan para señalar la **diferencia cualitativa** que existe entre ellas y las direcciones nacionalistas pequeño-burguesas.

Más allá de las diferencias políticas y organizativas —que no dejan de ser significativas— existentes, pueden delimitarse algunos grandes rasgos comunes:

a) Estas organizaciones han recogido la **experiencia de la revolución cubana**. La primera lección estratégica que extraen de ella y que se convierte en el hilo conductor de toda su reflexión y práctica durante 20 años: la revolución es posible en el patio trasero de los Estados Unidos. La transformación de una revolución que se inicia con objetivos antidictatoriales, democráticos y antiimperialistas, en una revolución socialista, pasa por el veto a toda mediación imperialista, por la conquista del poder y la negativa clara a compartir la fuerza militar con cualquier sector de la burguesía —es decir, la negativa a reconstruir un Estado burgués después de la caída de la dictadura—, por la organización y movilización de las masas para asegurar definitivamente su hegemonía.

b) La revolución cubana y la OLAS habían planteado la necesidad de la **lucha armada**, de acciones armadas para derribar a los gobiernos dictatoriales establecidos, y por tanto la ruptura

con la concepción de la **"vía pacífica al socialismo"**. Era este otro rompimiento con la política de los partidos comunistas. Los PC, o bien atribuían un papel dirigente a la burguesía en la revolución nacional-democrática y se colocaban a remolque de ella, o bien se proponían la constitución de un bloque político con la burguesía, cuya dirección incluso no estaría directamente en manos de ésta, pero que implica el mantenimiento del aparato de Estado. De este modo, los PC se limitaban a una práctica legalista, sindicalista y obrerista, incapaz de incorporar a la lucha a las masas empobrecidas de las ciudades y del campo.

La adopción de la **"estrategia de lucha armada"** no dejará de generar una serie de deformaciones, sintetizadas en el **"foquismo"**, que conducirá a un

callejón sin salida y a estrepitosos fracasos. En particular, se descuidaba la acción política propiamente dicha, asimilada a menudo al reformismo. Esto dejaba un espacio libre que podían ocupar los PC u otras fuerzas reformistas o nacionalistas.

Uno de los grandes méritos de las organizaciones revolucionarias **centroamericanas**, incluidas las de El Salvador, donde este tipo de guerrilla no se desarrolló consistió en realizar una reflexión sistemática sobre las derrotas del **"foquismo"**. Pero esta reflexión se inserta en una **continuidad de experiencias** —en términos de cuadros u organizaciones (FSLN) que habían conquistado una autoridad moral y política— que constituye un elemento capital de la maduración de estas organizaciones. La existencia misma de Cuba como **"retaguardia"** es una componente de esta continuidad político-organizativa, pese a las divergencias momentáneas entre estas organizaciones y la dirección castriata.

c) La revolución vietnamita también alimentó la reflexión de muchos de estos cuadros revolucionarios. Favoreció una revalorización del **trabajo político**, del **papel del partido** y de la idea de la **incorporación de las masas a la lucha armada**. A partir de ahí, la cuestión militar se plantea como una cuestión ante todo política. La experiencia vietnamita será un elemento muy importante —al que se añade el balance crítico de las guerrillas urbanas organizadas por los Tupamaros en Uruguay y el PRT argentino—, que estimulará un avance de estas organizaciones en el terreno de la creación de ejércitos y frentes de masas. En El Salvador, a

partir de 1981 se crea un auténtico **ejército revolucionario**.

Esta referencia vietnamita está a veces directamente vinculada a una estimación sobre la inevitabilidad de una intervención norteamericana —antes de la conquista del poder— que otorgará al combate de clases la naturaleza de una guerra de liberación. Así, la revolución indochina incitará a veces a efectuar generalizaciones esquemáticas y peligrosas. Su carácter de guerra de liberación nacional contra un **ejército de ocupación** comporta, por analogía, la elaboración (por ejemplo, en el caso de la GPP en Nicaragua) de una estrategia que subordina fuertemente la acción política y militar del momento a la preparación de la guerra contra la intervención imperialista futura. De este modo, esta orientación marginará las iniciativas políticas y militares destinadas a golpear a la dictadura y a conquistar el poder previamente a toda intervención imperialista. En este sentido, puede que prepare más la lucha contra el enemigo de mañana que contra el de hoy. Descuida las consignas políticas, el trabajo de organización de masas. La "montaña" se convierte en el lugar privilegiado de una acción que corre el riesgo de quedar aislada a escala nacional, o de limitarse a la organización de un sector popular en una "zona liberada".

d) A mediados de los años setenta se constituyen así organizaciones que en su práctica concreta efectuarán una combinación —en todos los casos original— entre la lucha política, económica y militar. Para ello establecerán un **vínculo orgánico** entre el trabajo de dirección de los sindicatos, de las organizaciones de masas rurales y de los "pobladores", y la lucha armada. Rechazan el insurreccionalismo espontaneísta concebido como un fruto automático de la autodefensa. Reincorporan la perspectiva de una insurrección a la lucha armada y a la acción de masas en su nivel más elevado (huelga general de masas, huelga general insurreccional).

Todas manifiestan una preocupación permanente por la organización del movimiento de masas, la acumulación de fuerzas en cuyo transcurso se entrecruzan las experiencias de lucha, las iniciativas de autodefensa y los destacamentos armados. La lucha armada se concibe como algo que debe desarrollarse en una cierta etapa, tanto en la ciudad como en la montaña y en el campo.

Proyectan una **política a escala nacional** y se convierten en protagonistas di-

rectos de los conflictos políticos. Arrebatan el control del movimiento de masas a las fuerzas reformistas, incluso creando organizaciones de masas.

e) Estas organizaciones rechazan la política de alianzas que preconizan los PC como parte integrante de su concepción de las "dos revoluciones". Al tiempo que manifestaban un sectarismo absoluto contra las fuerzas revolucionarias, los PC se ponían a remolque de las formaciones burguesas, tendiendo en el mejor de los casos a mejorar la relación de fuerzas mediante organizaciones fantasma incorporadas a los frentes electorales.

En contraposición a esta orientación, las organizaciones revolucionarias se perfilan globalmente como el enemigo número 1 de la dictadura y campeones de la autodeterminación. Disputan a los sectores de oposición burgueses la bandera de la cuestión nacional y antiimperialista. En este contexto, revelan con claridad cuáles son las **fuerzas motrices** de estas revoluciones: la alianza de las fuerzas obreras, campesinas y semi-proletarias. Construyen todos los elementos (organización de masas, fuerza militar, etc.) capaces de asegurar su independencia y su hegemonía **en el marco de estas alianzas**. Porque en estas revoluciones que empiezan con tareas nacionales-democráticas, captan la utilidad de las alianzas en el combate contra la dictadura y el imperialismo. Pero la sustancia de esta política de alianzas la resume muy bien el dirigente del FSLN, J. Wheelock: «*El eje de nuestra política de alianzas no era la burguesía, sino el pueblo. No es una afirmación demagógica. Es la pura verdad. Nuestro programa y nuestro esquema de fuerzas se basaban en una realidad concreta. Nosotros teníamos las armas y al pueblo con nosotros. Es una alianza contra la dictadura, popular y revolucionaria*». (El Gran Desafío, p.26).

Armadas con esta concepción, las organizaciones revolucionarias serán capaces de hacer converger en el crisol de la lucha contra la dictadura y el imperialismo a diferentes niveles y formas de la conciencia radical: desde la corriente marxista y comunista y los defensores de la teología de la liberación, pasando por las fuerzas democráticas radicales, hasta el potencial de revuelta de las masas indias y su voluntad de conquistar la dignidad.

f) Finalmente, despliegan una política internacionalista. Entienden el proceso revolucionario como algo a

escala regional y continental. Han creado una auténtica **diplomacia revolucionaria internacional**, que no es sólo funcional para el combate contra la intervención imperialista, sino también para ampliar la solidaridad de masas a escala mundial. Sin cesar han manifestado su solidaridad con las luchas de sus hermanos en América Central y el Caribe.

Estas organizaciones revolucionarias, como el FSLN y el FMLN, participan en primera línea en el proceso de reorganización del movimiento obrero y su vanguardia a escala internacional. El desarrollo de estas corrientes contribuye a incrementar el impacto de nuestro programa y de nuestras perspectivas a escala internacional. En este sentido, la IV Internacional y sus secciones deben esforzarse, más allá de las actividades de solidaridad, por emprender un diálogo con ellos y exponer nuestras posiciones sobre diversos temas que son objeto de discusión en su seno. Los militantes organizados en la IV Internacional en estos países sabrán participar plenamente en el combate dirigido por estas organizaciones y explicar las posiciones globales de nuestro movimiento.

6. La revolución centroamericana recoge por tanto y profundiza la lección de la revolución cubana. Hay una revolución ininterrumpida, permanente, que avanza desde las tareas democráticas y antiimperialistas hacia tareas socialistas.

La destrucción del aparato de Estado y de su columna vertebral represiva (ejército, policía, cuerpos especiales), la instauración de un **poder revolucionario independiente de la burguesía** y del imperialismo aparecen como una condición obligatoria para asegurar la aplicación de medidas democráticas y antiimperialistas y para hacer transcrecer la revolución nacional-democrática hacia la revolución socialista. Las reacciones del imperialismo, sus lazos con una burguesía que multiplica los sabotajes económicos y los ataques militares y políticos, hacen que el poder de los trabajadores y campesinos, la dictadura del proletariado —apoyándose en el ejército, las milicias y las organizaciones de masas— debe lanzar incursiones cada vez más profundas contra la propiedad capitalista. El paso a medidas socialistas se convierte en la garantía de una consolidación y ampliación de las conquistas sociales y de la independencia nacional.

### III. La revolución nicaragüense

1. La situación de dualidad de poderes abierta en abril-mayo de 1979 cambia **cuantitativamente** el 19 de julio. Tras el derrocamiento revolucionario de Somoza, la destrucción de la Guardia Nacional (que se superponía casi completamente al Estado somocista), **el poder efectivo de decisión, la centralización del poder popular están en manos del FSLN.**

El aparato de Estado burgués queda destruido en su parte fundamental —el aparato represivo— y se crea un **ejército revolucionario**— cuyo origen, composición, jerarquía y formación son el fruto directo de la guerra revolucionaria dirigida por el FSLN—. En Nicaragua, como en todas las revoluciones, el aparato de Estado no es liquidado de un sólo golpe en su totalidad (administración, banco central, partes del sistema judicial). Sin embargo, su componente principal queda eliminado y su lugar lo ocupa otro, **de naturaleza de clase diferente.** El ejército sandinista, que traduce la voluntad de las masas trabajadoras, dispone el **poder real** en el país.

La burguesía conserva, y seguirá conservando, fuertes bastiones económicos. Sin embargo, su tradicional debilidad política, su incapacidad en el último periodo para hacerse con la menor rienda en la dirección de la lucha contra Somoza, el hecho de que se viera obligada a existir a la sombra del sandinismo en la fase crucial de la revolución, todo ello da un carácter sumamente precario a su capacidad para traducir su peso económico en la presencia política. Posee organizaciones —ante todo el COSEP— canales de expresión (*La Prensa*, radios), aliados importantes en la jerarquía católica, partidos frágiles. Cuenta con apoyos en una parte del aparato de Estado (administración, banca, justicia), pero este personal está desprovisto del **poder de decisión estratégica.**

**tégica.**

Estos rasgos no sólo recuerdan los ya conocidos de otros procesos revolucionarios (Cuba), sino también la relativa brevedad del periodo de dualidad de poderes propiamente dicha y la política seguida, en este contexto particular, por el FSLN (creación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional —JGRN— en junio de 1979). Después del 19 de julio hay aún, por tanto, **elementos** de esta situación de doble

poder. Pero se sitúan en el marco de un poder central en manos del FSLN, que representa los intereses de los trabajadores y campesinos. No existe ya ninguna especie de reparto, más o menos igualitario, de elementos de poder antagónicos. La aguja de la balanza no está indecisa. El poder ha pasado a manos de los trabajadores.

La conquista del poder político y el control de los dispositivos fundamentales del poder de Estado, comienzo de toda revolución proletaria, atribuyen al FSLN los instrumentos que permiten defender la revolución, profundizarla, ampliar y consolidar su base social, lanzar incursiones contra la propiedad burguesa, transformar la economía en el sentido que interesa a la clase que ha ganado la revolución. Los ritmos de estas transformaciones —máxime en un país en que las fuerzas productivas están muy poco desarrolladas, y que sufre una dependencia extrema, a lo que se añaden las enormes presiones imperialistas— dependen de toda una serie de factores, nacionales e internacionales, políticos, sociales y económicos.

El 19 de julio marca los primeros pasos de la dictadura del proletariado basada en una alianza con el campesinado, de la construcción de un Estado obrero, que tiene que consolidarse, como todo Estado obrero que acaba de nacer; en este sentido hay una transición en la consolidación-construcción del Estado obrero. Existe una contradicción —pero comprimida en la camisa de fuerza del nuevo poder establecido— entre el contenido socioeconómico (peso del sector privado) de clase de las formas de propiedad y el contenido de clase de esta dictadura del proletariado naciente. Esta contraposición refleja la diferencia que existe entre la apropiación del poder político por el FSLN —es decir, el establecimiento de la dictadura del proletariado— y la consolidación de esta dictadura mediante la expropiación de la propiedad imperialista y burguesa y la introducción de formas de propiedad colectiva. La dictadura del proletariado —el proletariado que dispone de un instrumento: el Estado— abre un periodo de transición en que puede expresarse la oposición entre la naturaleza de clase del poder político y la naturaleza de clase de las relaciones económicas. Sin duda, en última instancia las bases económicas determinarán la consolidación del Estado obrero. En esta encrucijada, que constituye el momento necesario de toda evolución, es

la dirección del conjunto de medidas adoptadas la que pone en consonancia a la clase que ha hecho la revolución con su contenido social.

El examen del conjunto de medidas y conquistas de la revolución en los últimos cinco años no hace sino confirmar la consolidación del nuevo Estado obrero, del "segundo territorio libre de América". (\*).

2. A partir del 19 de julio hay que tener en cuenta tres problemas para entender las opciones básicas de la dirección sandinista. En primer lugar, el cuestionamiento radical del status quo en Centroamérica sólo puede desencadenar, en un plazo de tiempo más o menos corto, una agresión imperialista. Ganar tiempo, buscar puntos de apoyo, por muy frágiles que sean, utilizar las contradicciones interimperialistas: todo ello contribuye a la consolidación política de la revolución y al refuerzo de su defensa militar. Seguidamente, bajo el impacto de la revolución sandinista se acelera el ascenso revolucionario en el istmo centroamericano. El curso de la revolución nicaragüense debe vincularse a partir de entonces al avance de estas revoluciones y, a la inversa, a las acciones contrarrevolucionarias del imperialismo y sus aliados. Finalmente, el FSLN debe hacer frente a un desastre económico de calibre.

En este contexto consolida rápidamente los instrumentos básicos de su poder, del poder del bloque hegemónico de los obreros y campesinos, de los semiproletarios y subproletarios.

a) El ejército revolucionario es el elemento clave del nuevo Estado. Construir y profesionalizar el EPS (Ejército Popular Sandinista) —denominación harto elocuente— es lógicamente una tarea prioritaria. Su núcleo duro viene formado por los cerca de cinco mil combatientes procedentes de las "fuerzas regulares" del FSLN. A continuación se emprende una campaña de alfabetización y politización en su seno. La totalidad de la estructura de mando está en manos del FSLN. Al mismo tiempo se crea la policía sandinista. Recluta a gran parte de sus miembros entre los trabajadores combatientes antisomocistas condenados al paro por las destrucciones de la guerra.

Si bien se dá prioridad al EPS, la dirección del FSLN prepara desde el principio la creación de las milicias. Las Milicias Populares Sandinistas (MPS) se crean en febrero de 1980. Basadas en reclutas voluntarios, agrupan muy pronto a decenas de miles de trabajadores y

jóvenes.

Tanto el Ministerio del Interior como el de Defensa tiene su centro de decisión en la Dirección Nacional Conjunta del FSLN, formada por los "nueve comandantes de la revolución".

b) Los enfrentamientos políticos marcan el curso de la primera fase de la revolución, señalando dónde reside el **poder efectivo de decisión**. Ya en **diciembre de 1979**, el FSLN decide reorganizar el gobierno, atribuyéndose los tres ministerios decisivos: Defensa (H. Ortega), Agricultura y Reforma Agraria (R. Wheelock) y el Plan (H. Ruiz).

A partir de entonces, el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) concentra sus tiros públicamente en un objetivo: "*El FSLN debe reducir su control*" sobre el ejército, la policía y los CDS (Comités de Defensa Sandinista).

En **marzo-abril de 1980**, la JGRN se rompe en torno a la cuestión de la composición del Consejo de Estado. Se atribuye una **mayoría** confortable a las organizaciones de masas y partidos que traducen la voluntad mayoritaria de la población. La salida de los dos representantes burgueses de la JGRN (V. Chamorro-Barrios y A. Robelo) es revelador en varios sentidos. Se crea el Consejo de Estado sin más en la fecha del 4 de mayo, en que se conmemora la continuación de la lucha antiimperialista de Sandino pese a la traición burguesa (1927). Los dimisionarios no son sustituidos inmediatamente. La oposición burguesa trata directamente con los nueve comandantes, a sabiendas de quién es el que decide en última instancia. Y son estos últimos los que nombran, sin excesivo formalismo, a la nueva Junta. Incluyen en ella a dos nuevas personalidades burguesas (A. Cruz y R. Córdoba-Ribas), desarmando al COSEP, que se ve obligado a ratificar su presencia. Pero el COSEP reclama: una asamblea constituyente, la "*separación del FSLN y el Estado*", representantes en la JGRN con derecho de veto, el control de la justicia y las finanzas y, finalmente, garantías sobre el mantenimiento de la propiedad privada.

Los choques en torno a la formación del Consejo de Estado confirman doblemente quién manda a bordo. Por un lado, la dirección del FSLN manifiesta que tiene en sus manos el timón del Estado y no hace ninguna concesión mínimamente sustancial a la burguesía. Por otro, la sustitución de los dos representantes burgueses por otros demuestra a su manera que nada ha

cambiado: la representación burguesa queda radicalmente subordinada y con Cruz no tiene más que con Robelo una palanca que pueda accionar en el centro del nuevo aparato de Estado.

En julio de 1980, H. Ortega, en respuesta al COSEP, que reclama elecciones, anuncia que éstas se realizarán en 1985. De nuevo: ¿quién decide?. Es más, el ministro de Defensa declara que la auténtica democracia pasa por la nivelación de las desigualdades sociales y no únicamente por las elecciones, que "*se llevarán a cabo para perfeccionar el poder popular*".

A finales de 1980, la burguesía lanza una nueva ofensiva en torno a un tema que pasará a ser tradicional: el FSLN monopoliza el poder. Pero esta vez se combina con los primeros **ataques armados** contra la revolución. La oposición burguesa retira momentáneamente a una parte de sus miembros del Consejo de Estado, que algunos meses más tarde será reestructurado con una JGRN de tres miembros, cuyo coordinador será Daniel Ortega.

La burguesía y el imperialismo centran cada vez más su oposición en el terreno económico, lo que lleva a la JGRN a proclamar el estado de emergencia **económico y social** (septiembre de 1981), y en el terreno militar, lo que obliga a la JGRN a instaurar el **estado de emergencia**. Las maniobras políticas burguesas no cesan, pero a partir de entonces se convierten en simples complementos de los sabotajes económicos y en un apoyo más o menos abierto a la acción militar contrarrevolucionaria lanzada desde Honduras y Costa Rica.

c) El nuevo poder descansa, además de en el EPS y en las milicias, en el desarrollo de las **organizaciones de masas**, que en algunos casos son el fruto directo de la lucha revolucionaria (ATC, CDS).

Están representadas por:

—Los Comités de Defensa Sandinistas, cuya importancia es primordial para tratar de unificar a sectores populares **diferenciados**.

—La Central Sandinista de los Trabajadores (CST), que **por primera vez** organizará a escala nacional a una mayoría de trabajadores y se esforzará, después de algunas reticencias, por unificar el movimiento sindical de clase (creación, en febrero de 1980, de la Comisión Nacional Intersindical).

—La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), palanca de la reforma agraria, de la defensa del proletariado y semiproletariado rural y de la vigilancia

sobre los latifundistas; existe un vínculo orgánico entre la CST y la ATC, encarnando la alianza obrera y campesina.

—La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), que debe organizar a la fracción del campesinado, mediano y pequeño, que es decisiva para la producción alimentaria, el desarrollo cooperativo y cuyo apoyo es crucial para hacer frente a la contrarrevolución.

—La Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), vector de la conquista por las mujeres, cuyo papel en la revolución fue considerable, de sus derechos siempre denegados.

—La Juventud Sandinista 19 de julio (JS 19), que organizará, bajo el impulso de la campaña de alfabetización y de la creación de Batallones Estudiantiles para la Producción (BEP), a una fracción de la juventud.

La **alfabetización** constituyó un esfuerzo gigantesco de "*concienciación*" política de las masas urbanas y sobre todo rurales.

Las organizaciones de tipo sindical son independientes del FSLN. Aunque éste ejerza en ellas una influencia política preponderante, el Frente no impone su monopolio. Están abiertas a todos y todas. Su refuerzo, rasgo característico de todos estos años, inicia una profunda transformación en la conciencia de las masas y la gestión del poder.

Sus funciones y objetivos —que no

siempre se cumplen— pueden resumirse en los términos siguientes:

—Incitar a la participación popular en todos los aspectos de la vida social.

—Hacer que diversos sectores de la población se unan para defender sus intereses, expresar sus necesidades, incrementar su conciencia de clase y entablar un diálogo, a veces conflictivo, con el FSLN o los Ministerios.

—Participar en los órganos del poder político, lo que se traduce en el peso de su representación en el Consejo de Estado o en su papel en la creación de las Juntas Municipales.

—Apoyar la reconstrucción económica realizar campañas educativas, de salud pública, de mantenimiento de las infraestructuras locales y contribuir de este modo a elevar el nivel de vida de los más necesitados; también desempeñan un papel en la educación para la gestión a través de la propia planificación y del ordenamiento de sus tareas, de la formación de sus direcciones a todos los niveles.

—Defender la revolución contra las actividades de desinformación y sabotaje.

—Luchar contra "*los abusos de autoridad*", la "*prepotencia*", la burocratización —amenaza inherente en esta situación de subdesarrollo— y luchar por la "*moralización*" de una sociedad tan profundamente marcada, en el pasado, por toda suerte de corrupciones.

—Combinar el cambio de la situación



social y económica mediante la práctica revolucionaria con la "*autotransformación del hombre*" (Marx).

Desde los primeros meses, el FSLN ha utilizado el poder para **organizar y ampliar la mayoría popular** portadora de la revolución e iniciar la transición al socialismo.

d) Como centro de gravedad del poder real, el FSLN consolida su hegemonía y legitimidad negándose a provocar **a priori** rupturas con los sectores burgueses que formaban parte de la coalición creada en junio de 1979. Estas rupturas las emprende en torno a tareas y opciones concretas que se derivan del avance necesario de la revolución y favorecen la progresión de la conciencia de las masas. La burguesía ha quedado desacreditada en cada ocasión. Debe romper con el "*proyecto sandinista*"; aparece a los ojos del pueblo como opuesta a "*la unidad nacional e antiimperialista*" y a la "*reconstrucción nacional*". Existe en esta orientación una habilidad para captar la articulación entre la maduración de una conciencia nacional, antiimperialista y socialista. Se operará una decantación en la que cada vez más se impone el FSLN, no únicamente como el que derribó la dictadura, sino como el que conduce al país hacia una "*nueva sociedad*". Las **concesiones** hechas en torno a una cuestión u otra a la burguesía —que aún dispone de recursos, sobre todo gracias a sus vínculos con el imperialismo— deben resituarse dentro de esta dinámica global y en el marco del refuerzo de las posiciones de los trabajadores, para enjuiciarlas correctamente.

La **hegemonía** política del FSLN se basa en la autoridad conquistada durante el combate antiimperialista y contra la dictadura, así como en su capacidad para incluir lo esencial de las fuerzas vivas del país en un proyecto de construcción de la "*Nueva Nicaragua*", proyecto que afirma prácticamente su superioridad sobre las propuestas de las demás fuerzas sociales y políticas.

La conquista y reconquista permanentes de esta hegemonía suponen el **pluralismo**; máxime cuando el cimiento ideológico de la revolución nicaragüense reside en una alianza política y cultural particular entre el nacionalismo, el legado de las revoluciones socialistas (sobre todo Cuba) y también una corriente cristiana que ha sabido participar en los combates más duros por la independencia nacional y social.

3. La "*economía mixta*", caracterización dada por el FSLN a la **estructura**

**económica** de Nicaragua, no puede considerarse sin tener en cuenta el cuestionamiento de la dominación del imperialismo y la **naturaleza del poder** establecido. Asimismo hay que resituarla en su evolución.

En efecto, el Estado construido desde julio de 1979 deja su impronta en el carácter "mixto" de la economía en la medida en que detenta los medios y el apoyo social para aumentar las incursiones en la propiedad privada y las áreas que tradicionalmente le están reservados (comercio exterior, distribución, crédito etc). Actúa como palanca de cambio económico, como instrumento de coerción permanente. Por supuesto, ello no suprime las virulentas **contradicciones** que operan entre los diversos sectores de la economía, entre los objetivos socioeconómicos de la revolución y las presiones del mercado mundial así como los mecanismos de la producción de un sector privado con un peso preponderante en el terreno estratégico de la agroexportación. Pero el nuevo poder establecido puede resolver estas contradicciones a partir de las prioridades impuestas por la defensa de la revolución. La fuerza extraeconómica "ca" del Estado se convierte en fuerza económica.

a) En toda esta fase, las opciones del FSLN en el terreno económico no pueden desvincularse ni del estado de la economía en 1979, ni de los factores internacionales, ni del balance crítico de los primeros pasos de la transición realizada por la dirección castrista.

Cabe recordar algunos elementos:

— El legado del régimen somocista y de la guerra civil: cincuenta mil muertos y unos cien mil heridos; considerables destrozos en el terreno industrial y desbarajuste de dos campañas agrícolas, con sus repercusiones en la alimentación y la exportación; un PIB per cápita que ha retrocedido 17 años; una deuda exterior elevada y la ausencia casi total de divisas; una inflación importante; un desequilibrio presupuestario completo acompañado de un gigantesco "déficit social" (analfabetismo, sanidad, hábitat).

— Una economía capitalista poco desarrollada (mucho menos que la de Cuba en 1959), y por tanto con un proletariado urbano y rural, escaso y reciente, una capa de técnicos harto reducida (400, en total, en la agricultura).

— Una dependencia con respecto a la agroexportación para obtener ingresos exteriores, cuando ésta es extremadamente sensible a las fluctuaciones de

los precios y de la demanda de un mercado mundial en crisis; es más, la agroexportación comporta una serie de importaciones desproporcionadas (abonos, productos químicos, equipos y piezas de recambio), a lo que se añade el tradicional déficit alimentario.

— La constante amenaza de represalias e incluso de un bloqueo.

b) Ante una situación tan difícil, el nuevo poder se hace rápidamente con el control de cuatro sectores importantes de la economía: las propiedades de Somoza y sus aliados, constituyendo la columna vertebral del área de propiedad pública (APP); el sistema financiero y los seguros; el comercio exterior, nacionalizado gradualmente (hasta el 70% de las exportaciones); la totalidad de los recursos naturales.

Según el FSLN, una serie de consideraciones desaconsejan ocupar de inmediato el sector agroexportado:

— La fragilidad, la falta de cohesión de la burguesía deja cierto margen de maniobra y debe facilitar un "alianza productiva", cuya contrapartida implícita no es otra que la esperanza —y la posibilidad— de sectores de la burguesía de aprovechar sus bastiones económicos en la nueva guerra de trincheras que se inicia.

— El beneficio subsidiario buscado por esta alianza consiste en la concesión inmediata de créditos que son vitales y un aplazamiento del estrangulamiento económico imperialista. Rápidamente se obtienen préstamos por valor de unos 1500 millones de dólares, en condiciones favorables. Durante tres años no se denota ninguna prisa por parte del "campo socialista" —con la excepción decisiva de Cuba— por facilitar una ayuda masiva. Aparte de que adecuación a las necesidades inmediatas es relativa y que la diversificación de las ayudas e intercambios es también un elemento político en la lucha contra el belicismo de Washington.

— La APP precisa de un pesado esfuerzo de organización, nacional y local, para evitar que se desborden los gastos accesorios inevitables de la transición. La tensión es extrema, entre esta prioridad y todas las que se derivan más estrictamente de la reconstrucción. Para que la APP genere un excedente significativo debe mostrar una capacidad de gestión relativamente eficaz y ser capaz de absorber nuevas empresas en el futuro (agrarias o industriales). Sin embargo, el número de técnicos del FSLN o ganados a su causa es escaso y el nivel de preparación de los

trabajadores es, en este terreno, muy bajo.

— La débil socialización de las fuerzas productivas (importancia de la pequeña producción mercantil, del artesano, de los pequeños y medianos campesinos) convierte en problemática una planificación central cuyo ámbito de aplicación se ampliaría rápidamente. A ello se añade una escasa correspondencia entre la estructura de la demanda resultante de la modificación de la distribución de la renta y lo que puede ofrecer la APP. La planificación también pasa por una transición.

Así, el FSLN opta por una combinación entre un control directo sobre una APP minoritaria y un control indirecto (comercio exterior, crédito, contratos de producción, fijación de los precios de compra y salarios etc) sobre el área privada (AP), con todas las limitaciones típicas de la utilización de esta clase de palancas en un contexto de enfrentamiento entre las clases. Con muchas dificultades se pondrá en marcha una **planificación** de la APP, con una posterior regionalización. Se promulgan planes anuales, en términos de grandes objetivos y tareas.

El FSLN subraya con claridad que el objetivo a medio plazo es el de la propiedad estatal y cooperativa mayoritaria.

4. En respuesta a las reivindicaciones de las masas y al sabotaje de la burguesía, el FSLN cambiará las reglas de juego en detrimento de las antiguas clases dominantes.

a) En el segundo semestre de 1980, las leyes contra la descapitalización (fuga de capitales, destrucción de los medios de producción y materias primas, acaparamiento) permiten castigar este **delito** mediante la confiscación total o parcial de las tierras y empresas. El papel de la ATC y de la CST es la aplicación de esta legislación es significativo. Se abre una brecha en las filas capitalistas, entre los que "responden a las necesidades de la reconstrucción" y los que "sabotean", sin otorgar ninguna prima política a los primeros. El control de las operaciones de cambio irá en aumento y será total en mayo de 1983.

b) La **reforma agraria**, viga maestra de las transformaciones económicas, pasa por una etapa antisomocista y a continuación se extiende en primer lugar expropiando las tierras ocupadas por los campesinos pobres en los primeros meses de la revolución y rebajando el importe de la renta para el arrendamien-

to de la tierra. Se inicia una nueva etapa con la entrega a los campesinos sin tierra, a los pequeños campesinos pobres y en algunos casos a las granjas del Estado, de las tierras dejadas en baldío o mal cultivadas por los grandes terratenientes. Es un ataque directo a la propiedad latifundista.

En esta etapa **se hace hincapié en la constitución voluntaria de cooperativas** de producción (CAS) y de servicios (CSS). Son más idóneas para responder al problema candente del empleo que no la APP, a corto y medio plazo. Permiten incorporar al amplio sector de pequeños campesinos y semiproletarios a la producción de bienes alimenticios.

A comienzos de 1984 se abre una tercera etapa de la reforma agraria, con la concesión masiva de títulos de propiedad a pequeños campesinos que cultivaban tierras sin ser sus propietarios, particularmente en la zona de la "frontera agrícola". Esta medida es una respuesta a los intentos de las bandas armadas contrarrevolucionarias de establecer una base de apoyo entre los campesinos.

Cada una de las fases de la reforma agraria está estrechamente vinculada a un esfuerzo sistemático de organización del movimiento campesino.

El Estado, a su vez, garantiza a los campesinos, a duras penas, cierto número de bienes de consumo y servicios. Compra una parte de la producción a precios garantizados. De este modo domina más o menos el 40%, en términos de volumen, de la distribución de productos básicos (ENABAS). Se ponen en marcha una serie de grandes proyectos agrícolas y agroindustriales.

La agricultura ha conocido una efectiva reactivación económica, **junto con una transformación de las relaciones sociales**; doble objetivo que es la apuesta de toda reforma agraria radical.

El peso de los grandes terratenientes con respecto al sector estatal y cooperativo ha **disminuido**. En julio de 1979, los grandes latifundistas (más de 500 "manzanas") controlaban el 36,1% de las tierras **cultivables**, en julio de 1984: el 11%. En el sector privado (AP), la penetración de formas asociativas (cooperativas) introduce una **diferenciación**.

profunda que mina la base de la reaccionaria UPANIC (Unión Profesional de Agricultores Nicaragüenses). En 1984, 44.000 familias se han beneficiado de la reforma agraria, de las que 25.000 están

integradas en cooperativas. Las CAS controlan el 8,2% de las tierras cultivables; los CSS, el 10,7% y la APP el 18,3%.

La reforma agraria es un instrumento en manos de las fuerzas motrices de la revolución. Han roto las brutales formas de sobeexplotación, no únicamente en el sector público, sino también en el sector privado, donde la ATC puede poner en juego su fuerza. Un auténtico cataclismo sacude el campo nicaragüense, entre otras cosas con el avance de las formas cooperativistas; tiene lugar una intensa transformación del nivel cultural y político de las masas campesinas.

c) A todas estas conquistas hay que añadir los grandes logros en el terreno de la educación, la sanidad, el hábitat, las infraestructuras sociales, bases sólidas para el futuro desarrollo.

5. Aparecerán una serie de fuertes dificultades y tensiones, fruto de múltiples imperativos exteriores, de la estructura de una economía dominada y agroexportadora y típicas de la transición.

La lentitud de la reactivación industrial —tanto en el sector nacionalizado como en el privado— rebasa los pronósticos gubernamentales (falta de piezas de recambio, efectos perniciosos de una descapitalización prolongada, dificultades de gestión, restricción de mercados en América Central, bloqueo más o menos declarado por parte del imperialismo).

El empuje inflacionista se ve frenado al principio gracias a cierto ajuste entre una oferta muy restringida y una demanda incrementada (la disminución del paro amplía la masa salarial, por mucho que los salarios estén bloqueados). En efecto, es imposible llevar a cabo una política de relanzamiento salarial en las condiciones de la economía nicaragüense. Pero la reivindicación social y política de incrementar el nivel de vida ("salario social") de las capas desfavorecidas pesa en el presupuesto y se suma a los gastos de recapitalización y reconstrucción.

El hecho de apoyarse en el sector privado agroexportador para obtener ingresos **netos** de la exportación conlleva unas contradicciones intrínsecas con respecto a los objetivos sociales de la transición. Reestructurar la producción —tanto agroexportadora como alimentaria— y responder a las necesidades más urgentes de las masas exigen una financiación exterior. Por tanto, es indispensable controlar las rentas de

la exportación y sobre todo su **asignación** entre el sector agrario exportador y no exportador, si no se quiere que el esfuerzo de acumulación recaiga en los pequeños campesinos... o sobre la deuda, que ha aumentado fuertemente, máxime si se la compara con las entradas de divisas generadas por las exportaciones. Sin embargo, el Estado sólo controla una porción limitada de este sector en términos de propiedad.

Se busca un equilibrio sumamente precario para que la oferta de estímulos para la agroexportación no entre en conflicto demasiado abierto con una redistribución social de las rentas.

Una fracción creciente de capitalistas, incluso entre los medianos, invierte muy poco. Se produce un flujo de capitales hacia la distribución, donde las inversiones son fácilmente recuperables. Prosigue la fuga de capitales, y la sobrevaloración del córdoba (medida en dólares) exige una cobertura excesiva de las operaciones corrientes de cambio.

La masa de créditos oficiales (cerca del 40%) consagrados a la agricultura se orienta hacia la gran producción privada. Se concentran en la rúbrica "*créditos a corto plazo*", lo que refleja un escaso esfuerzo de renovación por parte de los capitalistas. El peso de la acumulación recae sobre el Estado, con una fuerte proporción en las obras públicas (proyectos de desarrollo y defensa). Esto, sumado a las demás rúbricas (entre otras, las subvenciones a una serie de bienes de consumo) ensancha la trampa de la deuda exterior y de la financiación del déficit presupuestario (8% del PIB en 1980, 23,3% en 1983) con la máquina de imprimir billetes, con la presión alcista de los precios que ello comporta.

La eliminación de la ancestral dominación de clase provoca, al principio, una disminución de la producción en la agricultura. La redistribución de tierras, la caída de la renta, las necesidades de la defensa restan efectivos al mercado de trabajo para los cultivos de temporada. El trabajo voluntario es un remedio parcial, pero que tiene efectos negativos en la productividad. La emigración a las ciudades persiste y agrava la contradicción entre el subempleo urbano (el sector "*informal*" de Managua), la escasez de mano de obra rural y la dificultad de canalizar esta fuerza de trabajo hacia sectores productivos.

El acceso directo al mercado por una parte considerable de productores de bienes alimenticios deja un amplio mar-

gen a las fuerzas del mercado, tanto en la producción y distribución (disminución de la superficie sembrada, venta en el mercado negro), como en la organización del trabajo.

La política crediticia con respecto a los campesinos pequeños y medianos no sabe responder a los que son demasiado pobres para endeudarse o que no poseen tierras, y de ahí la **aceleración**, a partir de 1982-1983, de la **distribución de tierras**. A continuación, existe el riesgo de que la deuda se interponga entre el nuevo Estado y una fracción de los campesinos, y de ahí la restructuración de la deuda campesina en 1983. Las cooperativas de producción reciben una ayuda prioritaria. Las cooperativas de servicios, más numerosas, no pueden evitar cierta diferenciación social, pero ésta no puede traducirse en la adquisición de tierras.

El crecimiento de la APP y del sector cooperativo es más fuerte que el de la AP. Pero la coordinación entre la APP y el sector cooperativos sigue siendo un proyecto sobre el papel, al tiempo que resulta difícil asegurar la planificación efectiva de la APP. La articulación entre el plan anual, los recursos exteriores y el presupuesto es muy débil. El sector privado aprovecha la brecha abierta en el control del comercio exterior para las operaciones especulativas. La disminución de las inversiones privadas repercute en el empleo, lo que en parte se ve contrarrestado por la redistribución de tierras y la movilización para la defensa. La tensión entre acumulación y consumo se agrava. El poder adquisitivo ha disminuido incluso para sectores populares; de todos modos, para los sectores más desfavorecidos ha habido un aumento del consumo y, más en general, de los servicios sociales.

Desde comienzos de 1983, la economía está sometida al **estado de sitio**. La contrarrevolución drena una parte importante de los recursos para la defensa (25% del presupuesto en 1984). En 1983, las destrucciones materiales equivalen al 20% del total de las inversiones. Ciertas zonas de cultivo se ven amenazadas; las cooperativas son las primeras víctimas de la contrarrevolución.

El **boicot financiero** se intensifica, aunque en 1983 aún afluyen créditos. La contribución de los "*países socialistas*" o de países como Argelia, Libia e Irán, va en aumento. Sin embargo, ello no compensa el agotamiento de los préstamos multilaterales y bilaterales y queda muy por debajo de las necesidades. Se

hunden proyectos de desarrollo. Las rentas de la exportación se estancan en **términos de valor**; la balanza comercial está muy desequilibrada; el servicio de la deuda es un fardo importante.

El déficit alimentario, pese a los gigantescos esfuerzos, es grave. La **penuria** de ciertos productos básicos se hace sentir. Esto se explica por la falta de divisas (importaciones), el aumento del consumo popular; los obstáculos al drenaje por parte del Estado de una parte de la producción alimentaria.

La política económica del FSLN baila sobre el filo de la navaja. El legado del pasado, la apresión imperialista, la polarización social desbaratan al máximo el proceso de acumulación. El Estado se ha convertido en el único centro **dinámico** de acumulación. Esto explica, junto con la participación popular, los resultados obtenidos en 1983 a pesar de todos los obstáculos. Pero este esfuerzo inversionista se hace al precio de un déficit presupuestario considerable y se basa en la ayuda exterior, que disminuye. La ley del valor y el mercado, dado el carácter minoritario del sector estatal y cooperativo, entran en contradicción aún más virulenta con los primeros intentos de establecer una planificación.

Se alcanzan los límites de la estrategia económica inicial. **Se impone una economía de guerra**. La defensa y la autosuficiencia alimenticia adquieren prioridad. Se establece el racionamiento de diversos productos. Los subsidios a los productos básicos se reducen a la mitad —salvo para la leche y el azúcar—. El Estado se hace cargo de la **distribución** de seis productos esenciales (junio de 1984). Se promulgan medidas de **confiscación** de los bienes de los especuladores, junto con una severa ley de defensa de los consumidores para apoyar la determinación centralizada de los precios de determinados productos y **"repartir equitativamente la penuria"**.

En semejante situación, la fuerza principal del FSLN reside en su capacidad para movilizar a las masas, consolidar sus organizaciones y su colaboración en la gestión del APP, su participación en la extensión del sector cooperativo, su poder de control de la distribución, su presencia sindical en el sector privado (control-gestión).

La situación de **guerra** impone los estrechos límites en los que puede moverse la política económica de la revolución. La reorganización de la economía debe plantearse en función de las necesidades de la defensa —militar,

social y política— de la revolución, sobre la que no sólo pesa la guerra contrarrevolucionaria, sino también la amenaza efectiva de una intervención masiva del imperialismo. Esta presión militar se añade a las debilidades estructurales heredadas del pasado. El camino es estrecho entre las medidas que implicarían un control mayor sobre el reparto del excedente (planificación) y una asignación centralizada de una parte creciente de las rentas de la agroexportación (con las dificultades que implica para llevar a buen puerto semejante proyecto), por un lado, y las necesidades de la defensa, por otro (con las medidas de austeridad que implican). En este contexto de duros enfrentamientos entre la revolución y la contrarrevolución, en una posición geoestratégica de las más difíciles, se plantea ante las masas trabajadoras y el FSLN el desafío histórico de consolidar el Estado obrero.

6. El objetivo del imperialismo sigue siendo el derrocamiento del poder sandinista. De momento, sus ataques pretenden hundir en Nicaragua en una crisis que el imperialismo quisiera no tuviera salida, y que haría que una parte de la población indecisa se volviera contra el gobierno revolucionario.

a) Los **contras** se infiltran en pequeñas unidades en numerosas regiones del país. Sin embargo, han sido incapaces de apoderarse de ninguna ciudad mínimamente importante ni de controlar duraderamente un territorio para declarar en él un gobierno provisional que solicitaría la ayuda del ejército norteamericano y de sus aliados regionales. Las fuerzas revolucionarias les han asestado duros golpes. El intento de utilizar las tiranteces entre el FSLN y los miskitos en una región estratégica (la costa atlántica, Zelaya) no ha dado los frutos esperados por el imperialismo. Sin embargo, el precio pagado por el FSLN es elevado. El plazo de tiempo necesario para eliminar los efectos de los errores cometidos en el enfoque de estos problemas étnicos, culturales e históricos es importante. El FSLN evoluciona hacia una política que incluye derechos de **autonomía** para las comunidades de la Costa Atlántica.

Los intentos imperialistas y reaccionarios de desencadenar una **guerra civil en Nicaragua**, como pretexto para una intervención, han naufragado hasta ahora.

b) La **oposición burguesa** se había erigido en campeona del pluralismo y de las elecciones, apostando de hecho a

que serían anuladas. El anuncio de que tendrían lugar el 4 de noviembre de 1984 la cogió desprevenida. No dejó de vacilar entre el boicot, preconizado de entrada por el COSEP, y la participación. Posteriormente desarrolló una táctica de participación condicional. Las reivindicaciones de la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN) — que agrupa al Partido Social Cristiano, el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal Constitucional— eran reveladoras en la medida en que reflejaban la voluntad de liquidar julio de 1979 (eliminación de hecho del EPS; supresión del servicio militar obligatorio; reorganización de las relaciones entre el FSLN y el Estado; supresión de la ley sobre la descapitalización; supervisión de las elecciones por la OEA, como recurso a la mediación imperialista).

El candidato de la CDN, Arturo Cruz, apoyado sin ambages por Washington, trató de imponer un "diálogo nacional con la oposición armada". Este "diálogo" era presentado como condición previa para la celebración de "elecciones verdaderamente libres". Toda la estrategia burguesa e imperialista trataba de **deslegitimar el escrutinio** —nacional e internacionalmente— y de que se reconociera a los contras.

El FSLN ha hecho fracasar esta política con una firme negativa a todo "diálogo nacional" con la contra y una serie de aperturas hacia una oposición inmersa en más de una contradicción. Las inscripciones masivas en las listas electorales reforzaron la posición de los sandinistas y mostraban su capacidad para crear un "consenso antiimperialista" de amplísimos sectores de la población, más allá de su base social más directa.

Toda la política de la burguesía reflejaba su debilitamiento social tras cinco años de revolución. Las antiguas clases dominantes no podían combatir ya la revolución sin pasarse **directamente** al bando de los imperialistas y sus mercenarios.

La **Iglesia** oficial constituye la oposición más organizada, presente entre la población y apoyada por un fuerte aparato de propaganda nacional e internacional. Busca el enfrentamiento con los sandinistas. Fue la Conferencia Episcopal la primera en proponer, en abril de 1984, "*un diálogo con todos los sectores, incluidos los nicaragüenses que han tomado las armas contra el gobierno*". Pero esta Iglesia está **dividida por una línea de clase**. El FSLN

reconoce el cristianismo como un elemento constitutivo de la revolución y ha sabido atraerse a las "*comunidades de base*" cristianas arraigadas entre los más desfavorecidos. Hay "*ministros de Dios que son ministros de la Revolución*". El FSLN combate a la jerarquía reaccionaria en su propio terreno.

7. Las **elecciones** de noviembre de 1984 fueron las primeras elecciones libres en Nicaragua, cuya vida política antes de 1979 se limitaba a la lucha ritual entre dos fracciones de la burguesía.

a) **La ley sobre los partidos políticos**, de agosto de 1983, en el marco de una profunda reorganización del sistema jurídico, permite la existencia de todos los partidos políticos, burgueses y obreros, "*constituídos para pretender el poder político con el fin de realizar un programa que responda a las necesidades del desarrollo nacional y social del país*". La ley electoral (marzo 1984), muy democrática, señala que el sufragio universal, desde los 16 años, es un "*derecho inalienable (del pueblo) a construir la nueva sociedad y su propio futuro sin ingerencia exterior de ninguna clase*". Regula la elección para seis años de un poder ejecutivo (presidente y vicepresidente elegidos por mayoría relativa), y de un poder legislativo (asamblea elegida por escrutinio proporcional), que en un primer momento tendrá una función constituyente. Como debe ser, esta ley prevé la supresión del derecho de voto y de la elegibilidad de los antiguos oficiales de la Guardia Nacional y de todos los comprometidos en actividades militares y de sabotaje contra la revolución.

Las elecciones de noviembre de 1984 demuestran con toda claridad que el FSLN no reduce ni mucho menos la "*democracia de masas*" a las simples elecciones. Pero no las excluye de su idea de la democracia. Ha dado prioridad a los aspectos sociales de la democracia y al papel de las organizaciones de masas. En efecto, estas organizaciones se han convocado **después** de cierta consolidación de los instrumentos del nuevo poder surgido de la victoria de julio de 1979 y tras un primer esfuerzo masivo en el terreno de la educación, la sanidad, etc.

La burguesía —siguiendo la tradición de las elecciones bajo Somoza, en las que el terror, la miseria, el analfabetismo y el caciquismo quitaban todo sentido al derecho formal de votar— exigía elecciones inmediatamente después de julio de 1979. En 1984

mostraba ya una actitud más vacilante.

Pero al convocar elecciones democráticas, el FSLN ha demostrado que estaba dispuesto a comprobar el **carácter mayoritario** de la revolución en un terreno que no necesariamente le es el más favorable, el del sufragio universal y secreto. Ha superado la prueba de forma concluyente. No sólo la participación electoral fue del 85% —y ello a pesar de una situación de guerra en numerosas regiones—, sino que se confirmó la hegemonía política del FSLN, incluso en este terreno.

Al introducir las elecciones en el mecanismo de institucionalización del nuevo poder, al dar carácter oficial a una oposición al FSLN —con cerca del 30% de los votos—, éste ha optado por encarar una serie de problemas que son parcialmente nuevos en el marco de las experiencias de transición al socialismo. Se trata de algo más que de un desafío al imperialismo. El FSLN no sólo mantiene abierto un amplísimo espacio de debate político, sino que asegura la existencia legal a los partidos y sindicatos de oposición, al tiempo que adopta severas medidas de autodefensa contra quienes sabotean en la práctica la revolución.

El FSLN utilizó estas elecciones como una segunda campaña de alfabetización política, teniendo en cuenta el sentido que adquirirían en el país estas primeras elecciones libres. Fue una ocasión de desarrollar una **pedagogía política** para las organizaciones de masas, para los miles de miembros y simpatizantes del FSLN. Como dice el artículo 1º de la Ley Electoral: *"La revolución popular sandinista institucionaliza el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus autoridades supremas"*. De este modo, el FSLN señala el carácter irreversible de las conquistas de julio de 1979. Pero al mismo tiempo, al integrar las elecciones en el funcionamiento de las instituciones, introduce una especie de control permanente, a través de posibles votos de castigo, frente a las deformaciones burocráticas, la pérdida de lazos con las masas, etc.

Durante las elecciones, el FSLN también supo extraer las lecciones, públicamente, de la tragedia interna de la revolución en **Granada**. En esta ocasión destacó tres elementos: la necesidad de mantener un debate democrático ante las masas, la necesidad de asegurar su participación directa en el proceso, la necesidad de su armamento.

La orientación del FSLN, al igual que el lugar que ocupan las organizaciones

de masas en el antiguo Consejo de Estado, dejan abierta la posibilidad; de que en el marco del establecimiento de las normas constitucionales por la nueva Asamblea, se añada otro elemento a la institucionalización del proceso revolucionario: la **representación directa** de estas organizaciones, su participación efectiva, a nivel local, regional y nacional, tanto en la elaboración como en la ejecución de las opciones socioeconómicas generales. En perspectiva se planteará entonces la cuestión de las **respectivas competencias** de este tipo de organismo de representación directa y de una asamblea legislativa.

En estas condiciones se plantea el problema de la **construcción del partido revolucionario** sandinista. Se ha emprendido un trabajo de educación política bastante amplio. En las JS 19, la ATC, la CST etc., se produce una selección de cuadros. Pero la construcción propiamente dicha del partido aún está por hacer. La dirección del proceso revolucionario descansa en gran medida en la autoridad de la dirección colectiva del FSLN, los nueve comandantes. Es cierto que el retraso en la construcción del partido se explica por el insuficiente número de cuadros, por su absorción en las tareas de reconstrucción y defensa, y por la ausencia de un funcionamiento de partido. Pero este retraso alberga ciertos riesgos, tanto para asegurar una vida interna democrática en el FSLN (más allá de la Asamblea Sandinista, organismo consultivo de 72 miembros), como para contrarrestar las deformaciones derivadas de un solapamiento entre el aparato de Estado y el FSLN, y para dirigir la lucha política de masas dentro del pluripartidismo.

b) La principal baza del FSLN, en este periodo de tensiones extremas, reside en la participación popular máxima en el proceso revolucionario. El refuerzo de las organizaciones de masas es una característica de los cinco años transcurridos.

El FSLN se topa con importantes dificultades objetivas y subjetivas en la organización de la **participación de los trabajadores en la gestión** de la producción (en la agricultura, por ejemplo). En el sector agrario, las *"asambleas de reactivación"* entraron bastante pronto en un callejón sin salida. En 1981 fueron sustituidas, en las empresas de la reforma agraria, por los *"consejos consultivos"*. Estos sólo han respondido parcialmente a las necesidades de una mayor integración de los productores en

la gestión. En el sector industrial público, después de una experiencia de "asambleas de reactivación", se han creado diversas estructuras (comités de producción etc.) para tratar de definir con más precisión las modalidades de participación de los productores en la dirección de las empresas de estos ramos. En la AP, la CST impulsa iniciativas de control contra el sabotaje económico y a favor de una gestión más eficaz. La prohibición de la huelga quedó levantada en 1984.

La penuria y la especulación actúan también como revelador de los límites y al mismo tiempo del potencial de los CDS. De los balances efectuados por los CDS se destacan dos cuestiones cruciales: en primer lugar, asegurar un funcionamiento más eficaz y democrático de los CDS (elecciones y revocabilidad), con el fin de combatir la inercia y las tendencias burocráticas inherentes a este tipo de situación de crisis y escasez; en segundo lugar, aprovechar los problemas socioeconómicos para estimular un "control desde abajo" sobre el funcionamiento del aparato de Estado. Las necesidades más inmediatas de la defensa podrían reforzar las tendencias a la rigidez administrativa y restringir la autonomía de algunas organizaciones de masas. El FSLN muestra una conciencia efectiva de estos problemas.

**La prioridad la tiene la defensa.** Las organizaciones de masas participan en ella directamente. En las zonas de guerra se lleva a cabo un **trabajo político** intenso en dirección a los campesinos, evitando así reducir la lucha contra las fuerzas mercenarias al mero aspecto militar.

El servicio militar patriótico ha permitido desenmascarar en un primer momento a los defensores de la "independencia nacional" que se niegan a servir a la causa del combate antiimperialista. Proporcionan entrenamiento militar a amplios sectores de la juventud. Gracias a las MPS y al servicio militar, el EPS no se ve forzado a dispersarse, lo que facilitaría una ofensiva brutal del imperialismo en una zona estratégica. El FSLN se esfuerza por adoptar medidas destinadas a atenuar las consecuencias sociales de este esfuerzo de defensa (pensiones a las familias de las víctimas, garantía de empleo, compensaciones a los campesinos cuyos cultivos sufren daños, etc.).

c) El FSLN redobla la iniciativa en el **terreno diplomático**. El eje de toda su diplomacia reposa en el derecho a la autodeterminación de los pueblos de la

región, en el rechazo de toda "ingerencia extranjera" en los asuntos internos de los países de Centroamérica y en el desmantelamiento de las bases militares extranjeras, lo que no puede sino beneficiar a las fuerzas de la revolución y chocar frontalmente con los proyectos de Washington.

La JGRN ha propuesto la firma de tratados bilaterales a los Estados Unidos, Honduras y El Salvador. Han servido para desenmascarar las maquinaciones imperialistas y la subordinación de los regímenes establecidos a los derechos de los Estados Unidos. Las iniciativas diplomáticas de la JGRN son una respuesta a las maniobras de Washington, que a veces juega la carta de la negociación para consumo interno de los EEUU, para apuntalar las operaciones políticas de la contrarrevolución y para evitar las tendencias centrifugas demasiado pronunciadas en los Estados latinoamericanos cuya caución les resulta útil para su política de agresión.

El FSLN dio correctamente su apoyo, en 1982-1983, a las iniciativas de Contadora y a su objetivo declarado de encontrar "una solución pacífica para la región". Sin embargo, no dejó de expresar su desacuerdo con una serie de aspectos presentados por Contadora ni de oponerse frontalmente a todas las propuestas que implican cualquier merma de la soberanía de Nicaragua y un debilitamiento de la revolución (defensa militar).

Siempre ha manifestado dudas en torno a la efectividad de Contadora, a causa de las presiones ejercidas por el imperialismo y su clientela endeudada, sin hablar siquiera de los intereses propios de esas burguesías latinoamericanas.

Sin embargo, no cabe poner en pie de igualdad los proyectos del imperialismo norteamericano y los objetivos de determinadas burguesías de América Latina. Existen manifiestamente intereses contradictorios, que explican las múltiples presiones ejercidas por los Estados Unidos sobre los miembros del grupo de Contadora, con el fin de alterar o hacer fracasar algunas de sus propuestas. Cuando los nicaragüenses firman, en septiembre de 1984, el acuerdo propuesto —que afirma el derecho de autodeterminación, la prohibición del embargo económico, la oposición a toda intervención extranjera—, los Estados Unidos despliegan todos sus esfuerzos para convertir el proyecto en papel mojado. Los Estados

Unidos tratan de lograr la rendición del FSLN bajo la cobertura del "diálogo nacional", es decir, la anulación de las elecciones de noviembre de 1984 y la convocatoria de nuevas elecciones bajo "supervisión" y la legitimación de la contra. Todo ello con miras a facilitar la apertura de una crisis política que diera pie a una intervención imperialista para "defender la democracia". Mientras, avanza la preparación técnica de una intervención masiva.

La evolución actual refleja la crisis abierta del proyecto inicial del grupo Contadora, la incapacidad del grueso de sus miembros para desarrollar concretamente una posición autónoma del imperialismo y su alineación progresiva (México es el único que expresa reticencias) con los Estados Unidos.

El FSLN se ha esforzado por mantener sus lazos con la socialdemocracia y utilizar todas las contradicciones en el campo imperialista. Sus relaciones con una fracción importante de la socialdemocracia se tensan en la medida en que esta última se adapta manifiestamente a la política del imperialismo, lo que no deja de provocar contradicciones internas.

En el contexto de fuertes enfrentamientos en la región, Nicaragua conserva sus lazos privilegiados con Cuba, que presta una ayuda decisiva al pueblo nicaragüense. Nicaragua desarrolla una opción de relaciones estratégicas con la URSS —que suministra actualmente una ayuda material relativamente importante— en el marco de una política expresa de "no alineamiento". Al mismo tiempo, para hacer frente a sus necesidades y aligerar el yugo impuesto por los Estados Unidos, trata de mantener una gran diversificación de sus intercambios económicos y "aperturas" necesarias hacia países europeos y latinoamericanos.

#### IV. La revolución salvadoreña

1. En El Salvador se desarrolla desde 1979 un ascenso revolucionario que incluye luchas obreras, campesinas, populares y estudiantiles, huelgas generales, semiinsurrecciones e insurrecciones locales, una guerra de guerrillas, una guerra civil. Todo ello a una escala sin precedentes en la historia de la región, a pesar de la intervención creciente de los Estados Unidos.

La brutal extensión de las relaciones de producción capitalistas, la concentración extrema de la propiedad de la tierra, combinadas con una fuerte densi-

dad demográfica, dan a luz muy pronto a un importante proletariado y semiproletariado en El Salvador. Junto a una clase obrera aún reducida y a un artesano miserable, será la fuerza motriz de la **insurrección proletaria de 1932**, que será sofocada a sangre y fuego. El combate que se desarrolla desde finales de los años setenta hereda el odio de masas ante la brutalidad de la oligarquía.

La industria se ha desarrollado sobre todo en los años sesenta, bajo la égida del Mercado Común Centroamericano. Se acentuó la concentración de tierras. Entonces, la oligarquía diversifica sus inversiones a partir del trampolín de las rentas agrarias: la agroindustria, el comercio de importación-exportación, las finanzas e incluso la industria. El capital imperialista se incorpora a este desarrollo, que da a luz también a algunos nuevos sectores burgueses.

La clase obrera sale reforzada de este proceso de transformación. En 1967, una huelga general de gran amplitud marca el primer cambio en las luchas reivindicativas. El proletariado y semiproletariado rural se ve golpeado por una terrible **depauperación**. Cada vez son más los campesinos que se ven **desprovistos** de tierras y de trabajo (en 1975, el 41% de las familias campesinas carecen de tierras), o trabajan como vendedores ambulantes, subproletarios, en las ciudades.

En 1969, la "guerra del fútbol" entre El Salvador y Honduras —que trata de proteger su mercado interior— estimula la crisis del Mercado Común Centroamericano (MCCA), lo que repercute en el sistema oligárquico salvadoreño. Decenas de campesinos salvadoreños que habían emigrado son expulsados de Honduras. Para las clases dominantes de El Salvador no sólo se ha cerrado un mercado, sino una válvula de seguridad demográfica.

Estos nuevos refugiados, que en algunos casos tienen experiencias de luchas sindicales en las plantaciones hondureñas, organizarán manifestaciones reivindicativas. Es la primera vez desde 1932 que los campesinos invaden las ciudades.

La "guerra del fútbol" suscita también una crisis política en las filas de la izquierda, particularmente en el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) que apoyó políticamente al gobierno en el choque militar. De este modo se perfila un **cambio** al comienzo de los años setenta.

2. De 1970 a 1979 se produce una

serie de rupturas que altera la situación política para todo el decenio: aparición de las organizaciones político-militares, creación de organizaciones populares de masas, radicalización en medios cristianos, inutilidad confirmada de la vía electoral.

a) En abril de 1970, un sector de la dirección del PCS, vinculada al movimiento sindical, rompe con el partido para crear una organización político-militar: las **Fuerzas Populares de Liberación (FPL)** Farabundo Martí. A partir de círculos cristianos radicalizados se forma, también en 1970, el **Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)**. Las primeras acciones armadas de estas dos organizaciones se remontan a 1972.

En comparación con Nicaragua o Guatemala, las organizaciones que emprenden la lucha armada se constituyen tardíamente. Es cierto que deben responder a condiciones muy particulares, propias de la estructura social y la configuración del país (extensión reducida, densidad de población, variedad de vías de comunicación, inexistencia de "montañas protectoras"), y al traumatismo de 1932. En esta etapa, la elaboración político-militar de las FPL es la más significativa. Su dirección se nutre de una rica tradición sindical. Comprende la necesidad de prestar nuevos instrumentos de lucha a la violencia de las masas ferozmente reprimidas. Su idea se resume en una fórmula: "*nuestra montaña es el pueblo*". Su reflexión se alimenta también con las experiencias de guerrilla urbana. Como coronación de toda su evolución, su concepción de la lucha armada, en el sentido estricto del término, articulará: las **milicias** (instrumentos de autodefensa de las masas vinculados a los barrios, a los lugares de trabajo y de preparación de la insurrección), la **guerrilla** (fuerza reducida, que combate en una zona fija) y, a nivel superior, el **ejército revolucionario**.

El ERP viene marcado desde el comienzo por el militarismo y un aventurerismo que reposa en una caracterización de la situación como revolucionaria desde 1972. Esta orientación lo separa de sectores de masas y será un elemento importante de una escisión, en 1974, de la que surgen las **Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN-RN)**. A partir de 1975-1976 empieza a producirse una reorientación en el ERP.

A finales de 1979, pese a una serie de divergencias que pueden ocultarse incluso tras fórmulas análogas, se inicia una confluencia entre las organi-

zaciones revolucionarias en torno a cuestiones como: la autodefensa, la guerrilla, el ejército, la necesidad de vincular la guerra revolucionaria popular con las perspectivas insurreccionales de masas, en la óptica de destruir el ejército y los cuerpos represivos. Todas las organizaciones subrayan la necesidad de plantear una perspectiva política de poder.

b) A mediados de los años setenta aparecen las **organizaciones populares revolucionarias de masas**. Así se expresa la necesidad de las masas, agredidas por un aumento brutal de los precios, de encontrar nuevos instrumentos para hacer frente a la represión, para superar el obstáculo de todo un aparato jurídico que paraliza el recurso a la huelga. Estas organizaciones populares sancionan el fracaso de los métodos del PCS frente a la combatividad del proletariado en los sectores industriales más recientes.

En 1974 se crea el **Frente de Acción Popular Unificada (FAPU)**; en 1975, el **Bloque Popular Revolucionario (BPR)**, surgido de una ruptura del FAPU; en 1977, las **Ligas Populares del 28 de Febrero (LP 28)**. Estas organizaciones están compuestas por agrupamientos socio-sectoriales (trabajadores, campesinos, habitantes de los barrios periféricos, enseñantes, estudiantes y escolares, pequeños vendedores), ya existentes cuando aquellas se forman o que ellas mismas constituyen. Todas las organizaciones populares revolucionarias están vinculadas a una organización político-militar: el BPR a las FPL, el FAPU a las FARN y las LP 28 al ERP.

Las mujeres ocupan en las organizaciones político-militares, incluso a nivel de dirección, al igual que en las organizaciones de masas, un lugar jamás conocido en la historia; esto refleja las profundas mutaciones surgidas en medios universitarios y enseñantes, pero también el papel de las mujeres en la organización de la lucha en el campo, en los barrios, contra la represión.

Entre 1977 y 1979 proliferan las luchas obreras y campesinas. La forma que adoptan estas movilizaciones es una ruptura con el pasado: huelgas con ocupación y autodefensa, ocupaciones de las grandes haciendas, huelgas de solidaridad, manifestaciones de apoyo a las luchas, ocupaciones de iglesias y embajadas, manifestaciones de masas autoprotegidas y acciones armadas. Estas luchas logran una serie de éxitos reivindicativos a pesar de los intentos de sofocarlas y de una legislación brutal-

mente represiva.

Las organizaciones populares revolucionarias arrebatan definitivamente a PCS el control del movimiento sindical —con excepción del sindicato de la construcción—, impulsando en su seno una orientación radical, ante todo en la Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (CUTS). El sindicalismo ligado al Estado se hunde dramáticamente, los avances de las organizaciones en el movimiento campesino, donde el PCS está casi ausente, son impresionantes. Las organizaciones político-militares y populares de masas conquistan, a partir de 1978, la **hegemonía** sobre el grueso del movimiento de masas. Madura una situación revolucionaria.

c) En la Iglesia se produce una *"conversión"* que repercutirá tanto en la universidad como en el campo. Las comunidades cristianas de base *"coincidirán"* a un campesinado terriblemente oprimido y explotado, facilitando el trabajo de los militantes revolucionarios, a menudo de origen cristiano, y legitimando sus acciones a los ojos de las masas.

d) Las elecciones de 1972 (presidenciales), de 1974 (municipales y legislativas) y 1977 (presidenciales) resultan ser la farsa más grosera. La política no es más que represión.

Los proyectos reformistas, que toman la vía electoral y se materializan en la **Unión Nacionalista de Oposición (UNO)** —que agrupa a la Democracia Cristiana, el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), que se reclama de la socialdemocracia, y la Unión Democrática Nacional (UDN), vinculada al PCS —harán agua por todas partes. La oligarquía y el grueso del ejército no están dispuestos a dar la mínima concesión a las sirenas de la reforma política y agraria. Sobre estas brasas soplará la revolución nicaragüense en 1979.

**3. Desde octubre de 1979 hasta mediados de 1980** se produce una rápida aceleración del ascenso revolucionario.

a) El 15 de octubre de 1979 un sector del ejército lanza, estimulado por el imperialismo, un golpe de Estado preventivo. Pretender frenar el ascenso del movimiento de masas y cortar la hierba bajo los pies de las organizaciones revolucionarias. Mientras que el poder real permanece en manos de los militares, la Junta distribuye un poder aparente a *"técnicos honestos"*, al PDC, al MNR. El PCS-UDN entra en este gobierno. La Junta trata de abrir un diálogo con el Foro Popular (que reúne al PDC, el MNR, la UDN y a organiza-

ciones sindicales) para intentar ocupar el terreno político y marginar a las organizaciones populares y revolucionarias. Se anuncia un programa de reformas, bastante amplio al menos sobre el papel.

Octubre de 1979 es una prueba para las organizaciones revolucionarias. Al deshacer esta trampa política reformista, salvan la perspectiva revolucionaria. Las FPL denuncian el golpe de Estado *"que pretende desviar a las masas hacia un proceso electoral"*. Las LP 28 abandonan inmediatamente el Foro Popular y el ERP condena el golpe de Estado como *"una nueva maniobra del imperialismo y de la oligarquía"*. Las FARN-FAPU vacilan un poco y ponen el acento en las contradicciones internas de la Junta. Después atacan la operación de recuperación reformista. El apoyo o la participación de las organizaciones revolucionarias en la Junta habrían desorientado a los sectores populares y allanado el camino a la política imperialista. Los revolucionarios no sólo denuncian in situ la imposibilidad del reformismo, sino que emprenden acciones militares semiinsurreccionales y organizan manifestaciones reivindicativas de masas. El contenido real del programa de la Junta queda desvelado por la conjugación de estas iniciativas y el empuje reivindicativo: en lugar de las reformas prometidas, masacres.

La primera Junta, de octubre a diciembre de 1979, que contaba con el apoyo de la Internacional Socialista y de la Unión Mundial Demócrata-Cristiana, y la segunda, de enero a marzo de 1980, se desgastan rápidamente. Los *"técnicos independientes"*, el MNR, el PCS, y después los representantes de la DC, abandonan el barco. El PDC de Duarte, a partir de marzo de 1980, se encuentra sólo con las fuerzas armadas, sin que quepa la menor duda en torno a quién manda en esta Junta.

b) Durante el primer semestre de 1980 se abre una **crisis revolucionaria** y aparecen los elementos constitutivos de una situación de dualidad de poderes.

**Por un lado**, la crisis de dirección burguesa adquiere profundidad. La oposición radical de las organizaciones corporativistas oligárquicas a la política de reformas de la Junta y al papel desempeñado por la Democracia Cristiana en su seno desgastan el poder gubernamental. Los conflictos en el ejército, al socaire de las maniobras de la oligarquía, desembocan en intentos

abortados de golpes de mano. El PDC se cuartea. Las reformas promulgadas se atascan y azuzan los conflictos interburgueses. La acción de la Junta se reduce a la represión generalizada: estado de sitio (marzo), ocupación militar de la universidad y militarización de los servicios públicos (agosto), intervención del Estado en los sindicatos, matanzas. Las acciones terroristas de las organizaciones paramilitares son cotidianas y afectan incluso a miembros de la DC. Esto genera el aislamiento político internacional de la Junta.

Por otro lado, las organizaciones revolucionarias han sabido explotar el espacio, aún restringido, que se abrió inmediatamente después de octubre de 1979. Las organizaciones populares reclutan y refuerzan su implantación. Ocupan la primera fila, relegando a las fuerzas de oposición democráticas y reformistas a un papel secundario. Las luchas de masas, a pesar de las masacres, adquieren una fuerza extraordinaria y alcanzan la cúspide durante el segundo semestre de 1980. El 17 de marzo, una huelga general convocada por las organizaciones populares revolucionarias paraliza el 70% de las actividades económicas del país. Tras el asesinato del arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero (el 24 de marzo) se lanza una huelga de ocho días. El 24 de junio, una **huelga general política** paraliza casi totalmente el país. De hecho plantea la cuestión del poder. La huelga general del 13 y 14 de agosto aparece como una huelga bisagra. Combina los rasgos de una huelga general con acciones militares y un empuje insurreccional en los barrios periféricos de la capital. La participación en la huelga, sin embargo, es menor que la de junio. Terrorismo de masas, militarización de la sociedad, contraofensiva de un ejército en que la derecha más extrema muestra sus puños, todo ello pesa sobre la población. En noviembre de 1980, el asesinato por las fuerzas paramilitares de los representantes oficiales del Frente Democrático Revolucionario (FDR) simboliza el final de esta fase de la revolución.

c) **A partir de febrero de 1980**, el campo de la revolución se había dotado de instrumentos unitarios que refuerzan su autoridad e influyen en el ascenso de masas. El BPR, el FAPU, las LP 28 y la UDN crean, en febrero, la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM). Su programa señala que la lucha por el

poder se concibe como algo **actual**. El objetivo no da lugar a dudas: «*La tarea decisiva de la revolución, de la que depende el cumplimiento de todas sus tareas, es la conquista del poder y la instauración de un gobierno revolucionario que iniciará, a la cabeza del pueblo, la construcción de una nueva sociedad. El Gobierno Democrático Revolucionario incluirá a representantes del movimiento revolucionario y popular y de los partidos, organizaciones, sectores y personalidades democráticas dispuestos a participar en la realización de este programa*».

«*Este gobierno se apoyará en una amplia base social y política formada en primer lugar por la clase obrera, los campesinos y las capas medias progresistas, estrechamente ligadas a estas últimas, se encontrarán todas las capas sociales dispuestas a aplicar este programa: los pequeños y medianos empresarios industriales, los comerciantes, los artesanos, los productores agrícolas (pequeños y medianos)*».

Además de las tareas democráticas, sociales y económicas (nacionalización de los sectores monopolistas, reforma agraria radical), subraya, entre las tareas políticas inmediatas, la creación «*del ejército popular construido en el transcurso del proceso revolucionario*», «*al que podrán incorporarse los elementos de la tropa, los suboficiales, oficiales y jefes del ejército actual que observen una conducta correcta, rechacen la intervención extranjera contra el proceso revolucionario y apoyen la lucha de liberación de nuestro pueblo*».



CRISTINA SANDINO EN EL MOMENTO DEL IMPULSO SOBRE EL TEMA "LA REVOLUCIÓN" EN "MÚLTIPLES EDICIONES" (PANAMA) 1978. AGRUP. REVOLUCIONARIA.

En abril de 1980 se constituye el **Frente Democrático Revolucionario (FDR)** —que agrupa al MNR, el Movimiento Popular Socialcristiano, una escisión del PDC, etc.— sobre la base del programa de la CRM, lo que refleja la hegemonía política conquistada por las organizaciones revolucionarias. Este dispositivo se complementa a finales de mayo por la creación de la **Dirección Revolucionaria Unificada (DRU)**, que permite dar un **primer paso** hacia la difícil unificación del mando de las organizaciones político-militares.

d) La actual dirección del FMLN considera que ha perdido una *"ocasión propicia"* en la lucha por el poder durante todos estos meses de 1980. Los siguientes puntos débiles condicionan la dirección del combate por las fuerzas revolucionarias.

Existe una falta de concordancia entre el auge y las exigencias de las luchas populares y la construcción del frente único de las organizaciones revolucionarias. Este frente único sólo se formará **tardíamente**, y su **contenido político, en términos de estrategia y táctica, es limitado**. Aunque tardía, esta unidad debe crearse, sin embargo, en un corto espacio de tiempo, con todas las complicaciones que ello comporta para responder a cuestiones cruciales en semejante coyuntura: dirección de huelgas generales, trabajo de división hacia el ejército, alianzas tácticas, coordinación y concentración planificadas de recursos militares aún relativamente escasos, diplomacia revolucionaria común para apuntalar la lucha, etc.

Un instrumento fundamental para la conquista de la hegemonía por las organizaciones revolucionarias sobre las capas trabajadoras, los frentes de masas, se transformará en un obstáculo para la construcción de **órganos de frente único en la base**. Ello por dos razones: por un lado, el sectarismo aún imperante entre las organizaciones; por otro, la concepción de sus relaciones con el movimiento de masas, que subvalora la lucha por la unidad en la base y prioriza el control estricto de cada una de ellas sobre sectores del movimiento de masas. La unidad en la cúspide de las direcciones, al igual que la fuerza de las organizaciones, han sido suficientes para convocar y organizar esas huelgas generales de extraordinaria amplitud. Pero las divisiones en la orientación estratégica y táctica y la inexistencia de instrumentos de unidad en la base socavan la preparación insurreccional. Además, la ausencia de

comités unitarios permite que repercutan con mayor fuerza, en las filas del pueblo, las diferencias entre las organizaciones y, a su vez, que no se presione a las direcciones de cara a la unidad.

En esta situación, el caso del PCS es particular. No cabe duda que operó un cambio drástico —imprescindible para sobrevivir— al unirse a la CRM, al empezar a practicar la lucha armada y renunciando a una estrategia que atribuye un papel dirigente a la burguesía en una *"primera fase de la revolución"*. Afirma la necesidad de *"arrebatarle el poder a la burguesía destruyendo su aparato burocrático-militar"* y la actualidad de la revolución socialista. Sin embargo, aún en 1981 justifica su participación en el gobierno en 1979, declarando que era necesario *"ir al lado de las fuerzas democráticas hasta el momento en que fracase el proyecto, para evitar la dispersión después de la derrota"*. Así mismo sigue atribuyendo un lugar importante en su estrategia a los *"sectores democráticos del ejército"* y no excluye un acuerdo estratégico con ellos.

4. Los últimos meses de 1980 se caracterizan por una **militarización intensificada** y la preparación por el FMLN de la ofensiva de enero de 1981.

Desde septiembre de 1980, los sectores reaccionarios tradicionales recuperan el control completo sobre el ejército. La colaboración militar con los ejércitos de Honduras y Guatemala se reanuda, bajo la égida de los Estados Unidos. Estos impiden el hundimiento económico de El Salvador y colocan a Duarte en la presidencia de la República (diciembre de 1980) —siendo el primer presidente civil en 49 años—, para que el régimen fuera más presentable en el terreno diplomático.

Por su parte, las fuerzas revolucionarias consolidan su potencial militar. Trasladan a numerosos cuadros del trabajo de masas, cada vez más arduo a la vista de la represión, hacia la actividad militar, con miras a lanzar un asalto. Ocupan militarmente aldeas para preparar la incorporación de la población a una futura insurrección. Las fuerzas de la DRU han aprendido del pasado y quieren aprovechar la situación política en los Estados Unidos (elecciones de 1980). Avanzan en la vía de la unidad, estimuladas en este sentido por la dirección castrista, y crean en octubre de 1980 el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Este sustituye a la DRU e incorpora al Partido Revolucionario de los Trabajadores

Centroamericanos (PRTC). Se crea un **mando general**, con un representante de cada una de las cinco organizaciones. Surge el consenso en torno a la preparación de una ofensiva militar general, calificada inicialmente de "*final*".

Esta se lanza el **10 de enero de 1981**. Los combates más violentos duran ocho días. Sin embargo, a partir del 14 de enero el FMLN organiza el repliegue. **La ofensiva "*final*" ha fracasado, pero el FMLN no resulta derrotado ni aplastado militarmente.**

Cabe destacar dos factores para comprender el sentido y los resultados de esta ofensiva.

—Esta se produce tarde con respecto al punto culminante de la movilización de masas, situado a mediados del año 1980. A partir de entonces se refuerza considerablemente el control de los militares sobre la capital y las principales ciudades. El terror y el traslado de los cuadros revolucionarios han debilitado el trabajo de masas.

—Los empujes insurreccionales en los barrios de la capital no se apoyan en una huelga general de gran amplitud. Al movimiento de masas le resulta más difícil expresar su combatividad, pues la protección militar revolucionaria es insuficiente. No se produce una concatenación de las insurrecciones locales parciales.

Además, la concentración de los ataques militares en los cuarteles, con el fin de asestar golpes muy duros al enemigo, consume importantes energías y da un mayor margen de movimiento al ejército contrarrevolucionario. Finalmente, las fuerzas militares del FMLN están poco coordinadas y los levantamientos y motines esperados en los cuarteles no se producen. A partir de enero de 1981 comienza realmente la **guerra civil**.

5. En la fase que se abre en enero de 1981 y se prolonga hasta **marzo-junio de 1982**, las fuerzas de la revolución y de la contrarrevolución reorganizan cada una su dispositivo.

a) En el plano militar, la ofensiva de enero de 1981 ha permitido, gracias a su amplitud, avanzar en la acumulación de fuerzas militares y experiencias. Hasta mediados del año 1981, sin embargo, el FMLN se ve obligado a defender sus posiciones. Hace fracasar las "*operaciones de limpieza*" de un ejército que busca un desenlace rápido. En esta batalla, las distintas fuerzas del FMLN conquistarán **zonas de control** —no zonas liberadas— que les permiten mejorar el entrenamiento de sus tropas,

hacer frente a los problemas de abastecimiento, disponer de bases para planificar ofensivas futuras, realizar emisiones de radio (*Radio Venceremos*) y empezar a construir un auténtico **ejército popular**. Las masas campesinas de estas zonas controladas se organizan poco a poco, tanto en defensa propia como para vincular sus actividades económicas a las necesidades de la guerra. Es lo que las FPL llamaron el **poder popular local (PPL)**.

A partir de finales del segundo semestre de 1981, el FMLN puede reanudar la ofensiva. Lanza ataques contra guarniciones, se apodera de una serie de núcleos de población (Perquín), destruye infraestructuras estratégicas (el Puente de Oro), asesta un duro golpe a la base aérea de Ilopango (enero de 1982). La presión militar sobre las ciudades se acentúa a comienzos de 1982 y prepara la campaña militar de marzo del mismo año, respuesta del FMLN a las elecciones.

b) Estas **elecciones legislativas de marzo de 1982**, fabricadas en los Estados Unidos, no constituyen ninguna victoria para éstos. Su baza era el pacto PDC-fuerzas armadas. Sin embargo, el PDC se ve relegado a segundo término por una alianza en el Parlamento entre el Partido de Conciliación Nacional (PCN), el partido histórico de la oligarquía, y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). La oligarquía y sus aliados, para impedir cualquier reforma y reaccionar frente a la incapacidad de la Junta de desmantelar el FMLN, se han colocado tras esta formación política reciente y fascizante. En efecto, la Arena organiza una "*base popular*" y dispone de un brazo armado (escuadrón de la muerte). De este modo se agudizará la crisis de dirección burguesa.

El fraude masivo salta a la vista, el avance electoral de Arena y la capacidad militar del FMLN neutralizan en buena parte la utilización de estas elecciones por los Estados Unidos. A pesar de todo, se celebran. Una parte de la población acude a votar (alrededor del 50%), en muchos casos bajo coacción. Las elecciones sacan a la luz las convulsiones que se producen en el campo de la burguesía y el malestar de determinados sectores de la población. A todo ello, el FMLN no da sino una respuesta mínima, aparte de su ofensiva militar.

Por un lado, la concepción de esta nueva ofensiva prolonga en cierto modo la de enero de 1981. La idea de una victoria a más o menos corto plazo, en una

perspectiva insurreccional combinada con ataques militares puntuales con miras a acelerar la descomposición del ejército, constituye aún el patrimonio estratégico del grueso de las fuerzas del FMLN, más allá de las divergencias que tienen en torno a la combinación entre estos distintos elementos y a los ritmos más concretos de su materialización. La revolución nicaragüense deja su impronta en el "esquema estratégico" del FMLN. Las insuficiencias de esta hipótesis en El Salvador son cada vez más evidentes.

Por otro lado, el FMLN en su conjunto estimaba con razón que las elecciones de 1982 no ofrecían ninguna solución al imperialismo. Pero sus distintos componentes no están de acuerdo en torno a las **propuestas tácticas de acción** (boicot militar o denuncia política). El resultado es claro: **el FMLN como tal no tiene ninguna posición política frente a las elecciones.**

En la discusión posterior a la experiencia de marzo de 1982, en el FMLN, aparecen tres temas:

—¿Cómo permitir que se exprese el apoyo, de una forma u otra, de sectores populares condenados al silencio por el "terrorismo de Estado"? La debilidad del FMLN, en esta coyuntura, no residía por tanto únicamente en sus insuficiencias militares.

—¿Cómo introducir fisuras políticas que permitan ampliar el campo de la oposición a la coalición régimen-imperialismo, a la vista de la mayor intervención de los Estados Unidos, del papel de Arena, de la crisis económica y de dirección burguesa?. Esto equivale a plantear el problema de las alianzas, de una apertura del FDR hacia fuerzas como las agrupadas en la **Unión Popular Democrática (UPD)**, creada en 1980. La UPD agrupa a la Unión Comunal Salvadoreña (UCS), el Sindicato de la Construcción (Fesincontrans), asociaciones de pequeños industriales y comerciantes, etc. Apoya al PDC, pero traduce también el apoyo de estos sectores a las reformas, su oposición a la represión ciega y su voluntad de "diálogo".

Se confirma un acuerdo en el FMLN en torno a la necesidad de **consolidar su fuerza militar** para volver a dar confianza a las masas que pueden haberse visto desconcertadas por los resultados de las dos ofensivas (enero de 1981 y marzo de 1982), y para asestar nuevos golpes al ejército. En efecto, los Estados Unidos han optado por reconstruir el ejército salvadoreño: batallones especiales instruidos en EEUU, reorgani-

zación de las estructuras de mando, participación de oficiales norteamericanos en la dirección directa de la guerra.

c) En el plano **diplomático**, la administración Reagan trata por un lado de relanzar los acuerdos regionales entre las burguesías (comunidades democráticas centroamericanas) y, por otro, de justificar su intervención tachando la revolución salvadoreña de fruto de la "ingerencia soviético-cubana y nicaragüense".

Este proyecto se ve contrarrestado coyunturalmente por la declaración franco-mexicana (agosto de 1981) y la propuesta de paz de López Portillo, presidente de México. El FMLN conquista de este modo un status diplomático a escala internacional, aunque la declaración franco-mexicana será vigorosamente atacada por las dictaduras militares del Cono Sur, así como por Venezuela y Colombia, por inspiración de los Estados Unidos (manifiesto de Caracas de septiembre de 1981).

Desde finales de 1981, el FMLN utiliza la **negociación** como instrumento de lucha. Demuestra que guerra y negociación no son antagónicas, sino que pueden ser complementarias. A escala internacional impone correctamente la idea: "sin el FMLN-FDR, el conflicto no tiene solución". En octubre de 1981, Nicaragua le ofrece una tribuna en la ONU para que presente su "propuesta de paz" y la apertura incondicional de negociaciones entre la Junta y el FDR-FMLN, en presencia de gobiernos testigo.

**6. Desde finales del primer semestre de 1982, hasta vísperas de las elecciones presidenciales de marzo de 1984, el curso de la revolución salvadoreña viene marcado: por una creciente capacidad de ofensiva militar del FMLN, por la intervención cada vez mayor del imperialismo norteamericano para apuntalar el régimen y su ejército, por una crisis seria en las FPL, por una redefinición de la plataforma política del FMLN-FDR y finalmente por el relanzamiento de un movimiento reivindicativo aún modesto en las ciudades.**

a) A partir de junio de 1982, el FMLN determina cada vez más las reacciones del ejército contrarrevolucionario mediante **ofensivas sorpresa** concentradas en objetivos determinados. De este modo puede derrotar a compañías enteras de soldados; intensificar la recuperación de armas; dificultar los desplazamientos del ejército; desarrollar una política en dirección a los

soldados prisioneros y los que se entregan; ocupar temporalmente ciudades relativamente importantes; coordinar mejor las operaciones en distintos frentes, que siguen estando ligados por separado a cada una de las organizaciones del FMLN.

A partir de mediados de 1983, el imperialismo lanza "**operaciones militares y civiles**" denominadas plan Conara (Comisión Nacional de Restauración de las Zonas), en un intento de suprimir la base social de apoyo de las fuerzas revolucionarias (bombardeos, desplazamientos de la población, patrullas civiles y pequeñas unidades militares móviles).

Sin embargo, a partir de septiembre de 1983, el FMLN logra quebrantar de nuevo los planes imperialistas. Se apodera de la tercera ciudad del país (San Miguel), de un cuartel importante (El Paraíso) y controla casi completamente tres departamentos.

Estas acciones militares **ya no se inscriben en una perspectiva insurreccional a corto plazo, de "batalla final"**. Su función consiste en mantener la iniciativa en manos de los revolucionarios; demuestran a la población que la dictadura pierde su control sobre una parte creciente del territorio. Así mismo, están destinadas a debilitar al ejército y contrarrestar de este modo los efectos de la ayuda norteamericana destinada a recomponerlo, ampliar los efectivos del FMLN con el fin de modificar la relación de fuerzas y cambiar el signo de la situación. Partiendo precisamente de la **prioridad** otorgada a este esfuerzo militar, el mando general del FMLN sitúa en enero de 1984 sus iniciativas en el terreno político y diplomático.

La propia lógica del desarrollo de esta guerra plantea dos cuestiones clave:

—La intervención creciente de los Estados Unidos, paralela a la incapacidad del ejército salvadoreño de cumplir su función contrarrevolucionaria sin que sea asumida por el imperialismo, implica cada vez más que **la guerra civil adquiere una dimensión de guerra de liberación nacional**.

—¿Cómo establecer una relación entre los progresos realizados en el plano militar, la acción de masas fuera de las zonas de control del FMLN y una respuesta en el plano político?

La discusión abierta en el FMLN después de marzo de 1982 no puede sino rebrotar.

b) El **gobierno de "unión nacional"** formado por Alvaro Magaña, tras las elecciones de marzo de 1982, conocerá

una crisis después de otra. Las elecciones presidenciales previstas para 1983 por los Estados Unidos deben aplazarse a 1984. La segunda fase de la pretendida reforma agraria queda relegada a las calendas griegas.

En este contexto, la UPD canaliza los movimientos reivindicativos de los pequeños y medianos campesinos (septiembre de 1983). También llena un vacío dejado por la disminución de la presencia del FMLN en las ciudades. La caída del poder adquisitivo de los asalariados y la sobreexplotación desenfrenada hacen que se disparen huelgas en la administración y en las empresas. Se produce una recomposición sindical limitada, con el nacimiento del Movimiento Unitario Sindical y Profesional de El Salvador (Musyges), en mayo de 1983.

Las fuerzas del FMLN están lejos de poder influir ampliamente en este movimiento de protesta. En las ciudades, la pérdida de cuadros del movimiento de masas y los efectos de la guerra civil han alterado la relación de fuerzas. Los canales de expresión que los trabajadores se ven obligados a utilizar están a menudo dirigidos por fuerzas vinculadas a partidos burgueses u organizaciones pequeñoburguesas. Las reivindicaciones salariales, democráticas y el "**deseo de paz**" ocupan desde entonces un lugar importante. Desde luego, esto no está en contradicción con una simpatía hacia la actividad del FMLN en la guerra civil.

c) El FMLN mantiene su presión **político-diplomática**. Desenmascara la maniobra realizada por el gobierno y los EEUU con la creación de la Comisión de Paz, estructura creada por la Junta para emprender "*un diálogo sin negociaciones directas*" y para jugar la carta de una participación de un sector del FMLN-FDR en futuras elecciones. El FMLN le plantea tres problemas a esta comisión: la retirada de los Estados Unidos de El Salvador, la apertura del diálogo en territorio salvadoreño, las condiciones de un alto el fuego y de la participación en las elecciones. Pero la Comisión de Paz sólo está autorizada a discutir sobre la participación en las elecciones (!). Sin embargo, para el FMLN esta participación sólo puede plantearse **después** de la instauración de un "*gobierno de amplia participación*" (declaración de septiembre de 1983, en Colombia).

Esta propuesta de gobierno se convierte en un elemento importante de la respuesta política y diplomática del

FMLN-FDR. A finales de enero de 1984, y con miras a las elecciones de marzo de ese mismo año, presenta la propuesta de formación de un **"Gobierno provisional de amplia participación"** (GAP) y su plataforma.

Las tareas *«más inmediatas de este gobierno provisional»* son: *«Destruir el aparato de represión», «disolver los cuerpos de seguridad, los escuadrones de la muerte y su organización política, el partido Arena», «expulsar a los consejeros norteamericanos, suspender la intervención y ayuda militar, así como todos los suministros de armas al país», «depurar las fuerzas armadas y, más tarde, incluir a sus representantes en el gobierno provisional, juzgar, previa instrucción, a los civiles y militares responsables del genocidio, de los crímenes políticos, las torturas, los secuestros y las violaciones de las libertades individuales de los ciudadanos».* El restablecimiento de la totalidad de los derechos democráticos, una serie de *«reformas sociales y económicas fundamentales para transformar las estructuras existentes»* completan estas tareas. Como culminación del proceso, se trata de crear las condiciones *«para preparar y realizar elecciones generales».*

El acuerdo en torno a las tareas de este gobierno, *«que no estará llamado a durar»* y a los plazos y modalidades de su aplicación determina la creación de las estructuras gubernamentales. *«Este proceso debe concluir con la organización de un ejército nacional único, formado por las fuerzas del FMLN y las fuerzas armadas del gobierno actual, previa depuración. Los destacamentos del FMLN y las fuerzas armadas gubernamentales conservarán las armas hasta la conclusión de las negociaciones».* Finalmente, *«en este gobierno provisional deben entrar los representantes del movimiento obrero, de los campesinos, enseñantes, asociaciones profesionales, empleados, organizaciones universitarias, partidos políticos, propietarios privados, del FMLN-FDR y de las fuerzas armadas reconstituidas. Quedarán excluidos la oligarquía, los sectores y personalidades opuestos a los objetivos de este gobierno o que preconicen el mantenimiento de la dictadura».* *«En este gobierno no predominará ninguna fuerza, y estarán representados en él todas las fuerzas sociales y políticas que preconizan el derrocamiento del régimen de la oligarquía, el restablecimiento de la soberanía e independencia nacional, que están*

*a favor de que la propiedad privada y las inversiones extranjeras no contradigan los intereses de la sociedad».*

La oferta de negociación del FMLN-FDR no sustituye la acción militar, sino que la **acompaña**. Excluye explícitamente que el FMLN deponga las armas antes del *«éxito de las negociaciones»*, que deben desarrollarse en dos tiempos:

*«Un diálogo directo y sin condiciones debe preceder a las negociaciones».* Esta iniciativa se sitúa dentro del marco de una orientación antiimperialista de *«defensa de la independencia, de la soberanía nacional y del derecho de autodeterminación».* Esto se apoya en una valoración de la naturaleza de la ofensiva política lanzada conjuntamente por los Estados Unidos, el ejército de Duarte, la dinámica de intervención cada vez más amplia de los EEUU, la regionalización posible del conflicto y la transformación de El Salvador en una especie de protectorado norteamericano. Esta plataforma marca un cambio que se perfila desde hacía tiempo, con respecto al programa de toma del poder a corto plazo de 1980, cambio que hay que reintegrar tanto en el marco nacional como internacional.

d) En abril de 1983 estalla una crisis dramática en el seno de la **dirección de las FPL**, con el asesinato de Ana María y el suicidio de Marcial.

Con ello reaparecen métodos para resolver las discrepancias internas que ya han hecho mucho daño a la revolución salvadoreña. Las dificultades extremas de la lucha militar, la militarización de las organizaciones, las maniobras de las fuerzas enemigas constituyen el marco de estos trágicos acontecimientos. Pero ninguna condición objetiva o *«necesidad de la lucha contra el enemigo de clase»* pueden justificar el empleo de este tipo de medios en las filas del movimiento obrero. Los diversos comunicados de las FPL y del FMLN para *«explicar»* los hechos no sólo modifican repetidamente su versión de los mismos, sino que formulan graves acusaciones sin aportar pruebas ni ofrecer sobre todo una explicación política digna de la causa de la revolución. En este sentido son inaceptables.

A partir de 1982, el debate en las FPL giraba en torno a cuestiones como:

—la articulación entre la alianza obrera y campesina y las alianzas con otros sectores sociales, el problema de la hegemonía proletaria en estas alianzas;

—la composición del gobierno

propuesto para lograr una solución política y la interrelación entre el combate anticapitalista y antiimperialista;

—el desarrollo y las modalidades del trabajo de masas urbano; la concepción del trabajo de debilitamiento del ejército enemigo y el aprovechamiento de las contradicciones que pudieran surgir en él; el lugar que ocupa la lucha diplomática en el combate revolucionario y sus relaciones con la lucha armada y la lucha política.

De hecho, todas estas divergencias adquirieron una agudeza particular cuando se relacionaban de modo inmediato con el problema de la construcción de una **organización unificada** y, por consiguiente, con el lugar que correspondería a cada una de las corrientes actuales del FMLN, entre otras a las fuerzas del PCS.

En **septiembre de 1983**, el consejo plenario de las FPL anuncia la elección de una nueva dirección. Señala las dos tareas fundamentales que se ha propuesto: *"la intensificación de la lucha popular revolucionaria en todos sus aspectos políticos, militares, diplomáticos, con miras a establecer un gobierno de amplia participación popular"*, y *"consagrar todos los esfuerzos a la lucha contra la intervención, en defensa legítima de la soberanía nacional, y del derecho a la libre autodeterminación frente a la política intervencionista creciente de la administración Reagan"*.

El debate que cruzaba las FPL se salda con una ruptura significativa, dando a luz por un lado al Movimiento Obrero Revolucionario (MOR) y por otro al Frente Clara Elisabeth. El MOR y el Frente relacionan el cambio operado por las FPL, *"el excesivo verticalismo de la Comisión Política"* y diversas presiones organizativas internacionales que, según ellos, se han ejercido sobre las FPL y el FMLN. El MOR, al igual que el Frente Clara Elisabeth, se reclaman de lo que consideran la orientación original de las FPL, del tipo *"guerra popular prolongada"*. También se reivindican del proyecto inicial de hacer de las FPL el único partido proletario revolucionario del FMLN; a partir de ello, estas dos formaciones pronuncian una serie de críticas sectarias y maximalistas que evitan el tener que responder en términos de orientación política concreta a los problemas actuales de la revolución salvadoreña.

7. Para el imperialismo norteamericano, las **elecciones presidenciales salvadoreñas** (marzo y mayo de 1984) cubren tres funciones:

—ofrecer una cobertura legal y democrática a una nueva escalada militar contra las fuerzas revolucionarias;

—poner fin al relativo aislamiento del gobierno salvadoreño a nivel internacional y combinar mejor la guerra y las presiones diplomáticas;

—tratar de modificar las relaciones entre la Arena y el PDC, aumentando así la eficacia de la política contrarrevolucionaria de Duarte y de un ejército remodelado, en el marco de un proyecto *"reformista-contrainsurreccional"* más eficaz.

El FMLN-FDR denuncia esta farsa electoral, pero no se plantea las elecciones como objetivo de acciones militares, salvo el ERP, que lanza iniciativas en este terreno. Pero el FMLN rechaza una tregua militar durante este período. La extensión de su control sobre el territorio, en comparación con marzo de 1982, se refleja en la imposibilidad para el gobierno de organizar el escrutinio en 89 municipios (el 34%).

a) Durante todo el primer semestre de 1984, el Pentágono y el Estado Mayor salvadoreño tratan de vincular la victoria electoral a la victoria militar. Acentúan la *"vigilancia"* aérea para impedir la concentración de tropas del FMLN y facilitar la persecución de sus destacamentos. Los bombardeos contra la población civil en las zonas de control del FMLN aumentan fuertemente.

Pese a la falta de recursos técnicos, las fuerzas revolucionarias son capaces de defender e incluso responder. El sabotaje económico (energía, transportes, agroexportación) ocupa un espacio importante de su actividad. Se apoderan incluso de la presa, fuertemente defendida, de Cerrón Grande (junio de 1984) y despliegan acciones en nuevas regiones.

Cabe sacar una conclusión: el ejército salvadoreño, cuyos efectivos se han duplicado desde 1981, **no es capaz de derrotar al ejército popular**. Por un lado, el ejército contrarrevolucionario topa con serias dificultades para hacer frente a la impericia de más de una estructura de mando, a la corrupción, la permanente renovación de la tropa, las deserciones, el bajo grado de combatividad. Por otro, el apoyo logístico y el control de los Estados Unidos a todos los niveles le permiten conducir una guerra contrainsurreccional cuyo precio es muy alto para la población rural, y mantener una presión militar más constante para arrebatarle la iniciativa táctica al FMLN, tratando de desalojarlo de las *"zonas controladas"* y, sobre todo,

dificultando enormemente la concentración de tropas. La naturaleza de la intervención norteamericana reduce para el imperialismo el margen disponible entre la opción por un debilitamiento cualitativo del FMLN apoyándose en un ejército salvadoreño dirigido por el Pentágono y la de una intervención directa y masiva.

b) El imperialismo norteamericano despliega una intensa actividad para proporcionarle un apoyo diplomático internacional al nuevo gobierno Duarte. La Unión Mundial Demócrata-Cristiana le asegura el apoyo de numerosas burguesías europeas. La Internacional socialdemócrata manifiesta su benevolencia y legitima su elección, al igual que México. Estas operaciones están destinadas a facilitarle la tarea de arrebatarse al FMLN-FDR la bandera de la "solución pacífica".

Pero el régimen de Duarte se ve minado por una serie de contradicciones:

—Difícilmente puede dar satisfacción al mismo tiempo a la Asociación Nacional de Empresarios Privados (ANEP) y a los movimientos reivindicativos cada vez más amplios (huelgas en obras públicas, correos, enseñantes, compañías de aguas, etc.). Idéntico conflicto potencial se da en el terreno de la reforma agraria. Todo ello habrá de repercutir en la UPD y tensar las relaciones con el PDC.

—La crisis institucional y política es imparable y habrán de proliferar los choques entre el gobierno de Duarte y el bloque ultra (Arena).

—La máscara democrática que quisiera endosarle Duarte al ejército no puede despertar ilusiones por mucho tiempo.

—El deterioro de la economía, unido a los obstáculos estructurales, quita toda credibilidad a unas medidas populistas reformistas y al relanzamiento económico.

El gobierno Duarte aparece ante los Estados Unidos como la última carta a jugar, antes de tener que optar por la invasión. Consolidar un bloque formado por Duarte y el mando del ejército, bloque que se apoyaría en un control máximo de las instituciones (nacionales y locales), constituye la opción más "rentable" para el imperialismo.

Tácticamente, Duarte y sus consejeros norteamericanos tratan de dividir las filas del FMLN-FDR especulando con la posible participación del "ala política" en no se sabe qué elecciones. La Internacional Socialista, las burguesías latinoamericanas dan pábulo a

estas maquinaciones en torno al tema: una tregua, entendida como una etapa hacia la entrega de las armas, crearía las condiciones ideales para el diálogo. De hecho, para el imperialismo norteamericano lo único que cuenta es el **debilitamiento cualitativo del FMLN-FDR, su derrota total**. Esta es la primera condición para toda negociación efectiva.

El FMLN-FDR rechaza firmemente las propuestas de Duarte y afirma la necesidad de «*avanzar en la guerra*» y en «*las luchas económicas, sociales y políticas*» mientras el imperialismo y el gobierno se aferren a sus posiciones. Los cinco comandantes del FMLN insisten públicamente en las condiciones mínimas que crearían «*el clima favorable y necesario para un diálogo: el fin de la participación directa norteamericana en la guerra, la suspensión inmediata de los bombardeos sobre la población civil, la liberación de los presos políticos y la supresión de la tortura, de los asesinatos, de las desapariciones*».

8. Las discusiones que tienen lugar en el FMLN desde 1982 y más en particular en las FPL, hacen referencia a los cambios acaecidos en el desarrollo de la revolución después de enero de 1981, por un lado, y a la situación de transición entre guerra civil y guerra de liberación nacional, a la vista de la intervención determinante del imperialismo en El Salvador y en el istmo centroamericano, por otro:

a) El FMLN hace frente a una serie de problemas importantes para el porvenir de la revolución:

—el coste social y humano de la guerra, el inevitable desgaste de sectores de la población y su voluntad de una "paz justa";

—el esfuerzo político y diplomático directo del imperialismo, que a diferencia de Nicaragua en 1978-1979 está en la primera línea de la gestión del conflicto;

—la posible aparición de contradicciones entre un sector social, vinculado entre otras a la UPD, pero que puede ser más amplio, y el gobierno actual; el relanzamiento de un movimiento de masas reivindicativo urbano que está lejos de mostrar el dinamismo y los medios de expresión que tenía en 1980.

En este contexto, el FMLN tiene que ofrecer, para poder dirigir incluso la guerra revolucionaria, una salida política y tomar la iniciativa en el terreno de las negociaciones. De ello se derivan una serie de exigencias:

—asegurar la presencia del FMLN-FDR en el terreno político para poner en

tela de juicio los resultados que busca el imperialismo con las elecciones y la investidura de Duarte;

—ampliar el frente de lucha contra la política de los Estados Unidos, de las fuerzas armadas y de la oligarquía, lo que implica agrupar en torno al FDR a sectores sociales que entren en oposición a la política del gobierno Duarte; conquistar un espacio político para tomar pie con más firmeza en el movimiento de masas urgano;

—mantener el trabajo de división del ejército contrarrevolucionario;

—desarrollar una actividad en el terreno diplomático para incrementar las dificultades políticas del imperialismo norteamericano en su escalada regional.

El programa de enero de 1984, por tanto, no puede separarse de las cuestiones que se le plantean al FMLN y a las masas en un marco distinto al de 1980. Es un intento de responder a estos problemas. Todo juicio sobre la dinámica real de una orientación negociadora con miras a la formación del GAP ha de tener en cuenta la negativa obstinada de los Estados Unidos a un diálogo —que pone en tela de juicio la presencia de EEUU— con el FMLN-FDR como fuerza beligerante, la actitud similar de todas las fuerzas dominantes de la burguesía salvadoreña, la polarización social, política, moral, la existencia de un ejército popular y de zonas controladas. Todo juicio sobre su función debe **relacionarse con la práctica actual del FMLN-FDR**. Evidentemente, la evolución de la relación de fuerzas en el seno del propio FMLN-FDR —relación de fuerzas que no es independiente de la que existe entre las clases y en el plano militar, ni de las enormes presiones internacionales que se concentran en El Salvador— contribuirá a determinar la manera en que se concretará la orientación adoptada a partir de 1983.

b) El FMLN formula sus propuestas de negociación desplegando al mismo tiempo un **constante esfuerzo militar**. Intenta unificar a los ojos de las masas, por un lado, una propuesta política para *“derribar a la vieja oligarquía y el Estado a su servicio”* y, por otro, a la vista de la política del imperialismo y de Duarte, la continuación de la guerra popular. Se dirige a todos los que han *“votado por la paz al votar por Duarte”* y cuyos reflejos antiimperialistas pueden agudizarse bajo el efecto de una guerra cuya salida aparece taponada a causa del bloqueo de los Estados Unidos y de su hombre, Duarte.

El relieve dado a las reivindicaciones democráticas y antiimperialistas —en comparación con el programa de 1980— corresponde a una exigencia del combate revolucionario en la fase actual. Toda la pirámide del poder de las fuerzas burguesas descansa sobre el pedestal de la ayuda imperialista. *«Expulsar a los consejeros norteamericanos, detener la intervención y la ayuda militar»*, esto es igual de decisivo que la batalla contra toda mediación imperialista en el proceso revolucionario cubano o nicaragüense.

La *“disolución de los cuerpos represivos”* y de la *“Arena”*, bastión político de la oligarquía, equivale a romper uno de sus puntos de apoyo vitales. Esto se presenta como un punto inicial de todo proceso real de negociación. Se trata de una respuesta a un sentimiento profundo de amplios sectores populares para meter una cuña en el sistema oligárquico y en el plan político anunciado por Duarte.

La consolidación de la acción popular no puede descansar tan sólo en las reivindicaciones inmediatas. El objetivo consiste en proporcionarle al movimiento reivindicativo, partiendo de su realidad, una **dinámica** de enfrentamiento político con la orientación práctica del gobierno establecido. Para ello, hay que ofrecer una perspectiva global que relacione las reivindicaciones democráticas, antiimperialistas y económicas inmediatas. Es ésta una manera de hacerle perder el equilibrio a las direcciones de organizaciones populares que querrían subordinar la actividad de las masas a las necesidades del régimen. La plataforma del GAP puede influir en este sentido, aunque no dé ninguna respuesta —no es esta su función— al espinoso problema del trabajo de masas en las ciudades.

La nacionalización de las *“empresas monopolistas”* ha desaparecido de la plataforma de 1984. Pero en este terreno, la cuestión verdadera reside en la voluntad de dar satisfacción a la enorme masa de campesinos sin tierra y empobrecidos, que constituyen un apoyo fundamental del proceso revolucionario. El programa del GAP reivindica *«el establecimiento de una reforma agraria completa»* que asegure *«la libre participación de los trabajadores del campo en su ejecución»*. Es el contenido real de esta reforma agraria el que importa.

La disminución de la amplitud de las reivindicaciones de expropiación en la

plataforma del GAP responde al intento de ampliar las alianzas. En este terreno se superponen dos cuestiones que no hay que confundir.

La **primera** es la de la misma concepción de las alianzas. La realidad del enfrentamiento de clases reduce al extremo a los sectores sustanciales de la burguesía dispuestos a jugar la misma carta que un Robelo. En la **práctica** la política de alianzas se dirige más a capas de la pequeña y media burguesía, hacia sectores como los de la UPD o capas burguesas reducidas que se oponen a la oligarquía. La fórmula sobre la composición del GAP, en cuanto a las fuerzas sociales, responde por cierto a esta realidad.

La política de alianzas no puede supereditarse, como da a entender el MOR, a la conquista **previa** de una nueva hegemonía sobre el movimiento popular. Al contrario, es una palanca para ampliar la influencia del FMLN-FDR en estas capas y combinarla con sus fuerzas político-militares propias. Tampoco puede separarse de una propuesta política global.

La **segunda** se centra en el problema básico del ejército. Las formulaciones del GAP al respecto son ambiguas y señalan el cambio más importante en relación con su plataforma de 1980. Puede que sea una cuestión táctica; en este sentido, en octubre de 1981 se habían utilizado fórmulas estrictamente similares en las propuestas de negociación hechas en la ONU.

Pero estas formulaciones pueden responder también a una orientación de sectores del FMLN en torno a una alianza con "*sectores sanos del ejército*", no en el sentido de acelerar su disgregación, sino de buscar un acuerdo institucional con esos sectores. Pueden inscribirse en un proyecto efectivo de una etapa transitoria a nivel de poder —a diferencia de lo que sucedió efectivamente en Nicaragua— antes del establecimiento del poder de los trabajadores, de los campesinos y sus aliados.

En el mundo concreto de la guerra civil en El Salvador, esta propuesta es en el mejor de los casos una táctica con respecto a posibles conflictos en el ejército, en el peor de los casos puede crear confusión. El rechazo práctico de una tregua efectiva prolongada y de la entrega de las armas —es decir, la negativa a subordinar la lucha a la negociación y a concebirla como instrumento auxiliar de la lucha—, la insistencia en la disolución de los cuerpos

represivos, el rechazo incondicional de la presencia norteamericana, las mismas modalidades del proceso de negociación, todo ello relativiza el sentido de esta propuesta de fusión de un "*ejército depurado*" y las tropas del FMLN. El peligro de esta propuesta saldría a la luz en el mismo momento en que condicionara la práctica del FMLN y provocara rupturas de gran envergadura en la dirección actual del FMLN.

La burocracia soviética, que encara la revolución salvadoreña en función de sus propios intereses frente al imperialismo, intenta reforzar su control sobre la revolución centroamericana a cambio de la ayuda que presta. Según la evolución internacional —la combinación entre la intensificación de la presión militar en la región, las dificultades con que topa la revolución en Centroamérica, la evolución de las negociaciones internacionales entre los Estados Unidos y la URSS—, puede intentar utilizar un punto de apoyo como la dirección del PCS para ejercer sus presiones en un sentido que convenga a sus intereses.

c) Las dos reuniones del otoño de 1984 (La Palma y Ayagualo) entre representantes del gobierno Duarte y del FMLN-FDR confirman la orientación de las fuerzas revolucionarias. Duarte no ha logrado cogerlos por sorpresa con su propuesta de negociación. En parte esta propuesta es fruto de la presión internacional, pero también del empuje del movimiento reivindicativo de los asalariados, de la base de la UPD y de las capas medias, que no ven la posibilidad de una estabilización, de algún relanzamiento económico sin la participación del FMLN-FDR. Por tanto también persigue un objetivo electoral (elecciones legislativas de 1985).

Sin embargo, Duarte y sus consejeros apuestan por un debilitamiento militar del FMLN. Ello les permitiría iniciar una negociación con fuerzas revolucionarias carentes de un control efectivo sobre regiones enteras del país (situación de dualidad de poder). Muy pronto se ha visto que el proyecto carece de fundamento, por muchas dificultades que tenga el FMLN-FDR en el terreno militar, en un momento en que ha de remodelar su estrategia militar para hacer frente a las operaciones conjuntas del ejército salvadoreño y su mando norteamericano (bombardeos aéreos, vigilancia aérea, tropas heli-transportadas, telecomunicaciones etc.).

El FMLN-FDR ha puesto el acento en ambas reuniones en el sentido social de

la paz, en la necesidad de la soberanía nacional (retirada de los consejeros norteamericanos), en el respeto de los derechos democráticos, en el desmantelamiento de los cuerpos mecánicamente a las negociaciones. Demuestra una vez más su capacidad revolucionaria en el plano político-militar, pese a las dificultades extremas en la que está sumido.

La relación de fuerzas militares que no varía, las dificultades políticas del gobierno Duarte, la política militar del Estado Mayor y de los norteamericanos, la capacidad del FMLN-FDR para utilizar políticamente el inicio de negociaciones, todo ello indica que Duarte no podrá sino renunciar a esta maniobra, de momento.

d) La **cuestión de la unidad** ha estado y está en el centro de los debates en el FMLN. El sectarismo tradicional ha tenido efectos devastadores en el campo de la revolución en El Salvador. La división ha repercutido negativamente en el movimiento de masas, en el proceso de autoorganización, en la dirección de las operaciones militares. Los métodos de discusión —como lo demuestra aún el enfrentamiento entre FPL, MOR y Frente Clara Elisabeth— contribuyen al debilitamiento del movimiento revolucionario.

La guerra revolucionaria exige la **unidad de mando en el plano militar**. Así mismo, las necesidades del movimiento de masas exigen urgentemente un esfuerzo centralizado por crear estructuras unitarias de base, capaces de captar y dirigir el potencial de combatividad.

El desarrollo de un proceso unitario, en el movimiento de masas, en el mando y la práctica militar, es un medio indispensable para alcanzar el objetivo de la creación de un **partido revolucionario unificado**. La mera existencia de un frente puede no estar a la altura de las necesidades actuales de la revolución.

La trayectoria histórica de las organizaciones, la compartimentación de su influencia político-militar hacen que una unificación que respete la aportación de cada organización y permita desarrollarla sea delicada y difícil. La unificación no puede venir impuesta. Y menos aún un partido monolítico, si no es al precio de una ruptura y de la supresión del funcionamiento democrático —dentro de los límites impuestos por la guerra— que es un factor necesario para la fusión real y el desbaratamiento de las maniobras de división. Hoy en día, el FMLN afirma que avanza en el *"largo proceso de síntesis"* que debe conducir

a un grado superior de unidad.

## V. La revolución en Guatemala

1. Por su situación geográfica, su numerosa población (unos 8 millones de habitantes), su peso económico, sus recursos (petróleo, níquel), la fuerza de su ejército contrarrevolucionario, al igual que por la historia y las conquistas de sus fuerzas revolucionarias, Guatemala constituye un eslabón decisivo en el choque entre la revolución y la contrarrevolución en América Central.

Para el imperialismo, apagar *"el incendio en el jardín de los Estados Unidos"* (Reagan) pasa también por el lanzamiento de la contrarrevolución en Guatemala, de común acuerdo con los militares guatemaltecos. El *"golpe"* (8 de agosto de 1983) que obligó al general Ríos Montt a volver a sus estudios bíblicos —después de que se hiciera con el poder en marzo de 1982—, sustituyéndolo por el general Mejía Víctores, forma parte de los planes del imperialismo, que vinculan lo político y lo militar en una concepción global de **"contrainsurgencia"**.

Hacia finales de la segunda guerra mundial (la *"revolución"* de 1944), Guatemala conoció un amplio ascenso del movimiento de masas y un período de apertura democrática excepcional (gobiernos de Juan José Arévalo, de 1945 a 1950, y del coronel Jacobo Arbenz, de 1950 a 1954) en comparación con la mayoría de países de América Central.

En este contexto —en el que fuerzas gubernamentales tratan de limitar un poco la dominación imperialista—, el movimiento de masas protagoniza luchas significativas, se organiza y conquista derechos (Código del Trabajo en 1947, por ejemplo). Si bien el avance en el grado de organización de los trabajadores (obreros industriales y agrícolas, asalariados del sector servicios y el sector público) es importante, hay que tener en cuenta, sin embargo, los límites objetivos del desarrollo del proletariado en su conjunto, en aquella época.

La **reforma agraria** promulgada en 1952 dará lugar a importantes expropiaciones de tierras, ya con compensaciones equivalentes al valor fiscal declarado (a todas luces subestimado por los propietarios), ya mediante la confiscación de tierras en baldío. El gigante agroindustrial, la United Fruit, se ve afectado por estas medidas. Al margen de los límites de esta reforma agraria,

para el imperialismo norteamericano y la oligarquía guatemalteca el proceso **político y social** lanzado en el país resulta amenazador. Se organiza un golpe de Estado para derribar el gobierno de Arbenz en junio de 1954.

Entonces se inicia un largo período de **represión sistemática** contra las masas trabajadoras y sus organizaciones. El ejército participa en ella en primera línea. Cada vez más se hace con las riendas, sobre todo a partir de la formación del gobierno del coronel Carlos Arana Osorio (1970). Algunas fracciones significativas de la jerarquía militar aprovechan su posición en el aparato de Estado y la gestión directa del gobierno para acumular capital (bienes mobiliarios e inmobiliarios) y ascender en la escala social. De este modo entran a formar parte de los círculos económicos dominantes del país.

De todo ello no sólo se deriva el papel particular atribuido al sector público en la economía, y una recomposición parcial de la clase que detenta el poder, sino también, potencialmente, una agudización de las contradicciones internas en el seno del ejército y en las esferas de la clase dominante.

2. Uno de los rasgos característicos de la estructura económica de Guatemala era la coexistencia (y complementariedad parcial) de una agricultura capitalista de exportación apoyada en el latifundio, de una industria de extracción (minas, petróleo), y de una agricultura minifundista, en especial en la montaña, que abarcaba el grueso de las **masas indias**. Estas vivían en una autarquía casi total con respecto al mercado capitalista.

Desde comienzos de los años sesenta se produce un cambio similar al de otros países de Centroamérica. Tiene lugar bajo el impacto de un vigoroso crecimiento económico, estimulado entre otras cosas por el MCCA. La extensión de las relaciones de producción capitalistas conocerá un acelerón, con su complemento, la disgregación **lenta** de las relaciones precapitalistas y una monetarización de la vida social que abarca a capas cada vez más amplias (disminución del autoconsumo). Desde entonces, las masas campesinas quedarán sujetas con más fuerza a las fluctuaciones del ciclo económico, a las peripecias de la coyuntura.

El crecimiento económico —por muy distorsionado que sea y por mucho que agrave la desigualdad social— es el más acentuado de toda América Central. Culmina en 1980: entonces se

produce un **vuelco** a nivel económico.

Las consecuencias sociales de esta llamada modernización de la sociedad guatemalteca son considerables. La burguesía se refuerza socialmente, variando la relación de fuerzas entre sus distintos componentes (agraria, industrial, incluso financiera, fracción procedente del ejército etc.). Esta transformación provoca tensiones internas y exige una reorganización de las modalidades de dominación, más allá de la prioridad otorgada por todos al aplastamiento del movimiento de masas y a la liquidación de las fuerzas militares de la revolución.

Paralelamente, el **proletariado** crece numéricamente en el sector industrial (alimentación, química, industria ligera de transformación, industria extractora), en la agricultura de exportación (azúcar, algodón, plátano) y en los sectores conexos. Las capas semiproletarizadas urbanas crecen rápidamente. Este proletariado se consolida socialmente sin disponer de ningún derecho democrático elemental. Constantemente ha de hacer frente a una máquina represiva mortífera.

3. La **crisis económica** golpeará de lleno a la economía de Guatemala. El descenso de la producción es drástico en 1982-1983 y 1984. La producción se torna brutalmente al nivel de 1972-1974. Aparecen todas las debilidades estructurales de esta economía capitalista-dependiente, estrechamente encadenada a las fluctuaciones de los precios de los productos exportados y cuyo mercado interior no deja de ser exiguo.

A la creciente fuga de capitales (que comienza antes del vuelco de 1980 por razones sociopolíticas) se añaden: los efectos de una corrupción sin límites y de unas inversiones públicas que responden más a los intereses a corto plazo de los rapaces que ejercen el poder que no a proyectos coherentes de desarrollo; una deuda exterior pública en ascenso, acompañada de una crisis fiscal extrema, "*cuidada*" gracias al funcionamiento de la máquina de imprimir billetes, con repercusiones inflacionistas inevitables; una depresión del mercado centroamericano sacudido por el ascenso revolucionario a partir de 1978-1979 y la crisis de la economía capitalista internacional; una disminución de las reservas de divisas con las consecuencias lógicas para las importaciones y por tanto los procesos de producción; la devaluación de hecho de la moneda nacional (quetzal) con respecto al dólar, el mercado negro de divisas y por consiguiente una presión inflacionista que no

puede sino ir en aumento; las presiones del FMI, que hace añicos el "modelo" económico basado en una fuerte participación del Estado en las inversiones (reducción del gasto público a partir de 1983).

Para las masas, esta crisis comporta una **depauperación** aún mayor. Para el grueso de la población, el problema número 1 es el de la **supervivencia** cotidiana.

4. Con cierto grado de autonomía con respecto a la crisis económica y, de hecho, como expresión del desarrollo económico, a mediados de los años setenta se produce una **reactivación de las luchas de masas**.

Con una especie de signo precursor de este ascenso, en 1973 los enseñantes entran en huelga. Se transformará en huelga nacional. Surgirá un amplio movimiento de solidaridad, con una imponente manifestación —teniendo en cuenta el terror reinante— de apoyo en la capital. Pese a la respuesta del gobierno Arana, los trabajadores del ferrocarril, de las compañías de electricidad y del tabaco también entran en lucha. Se produce una radicalización en los medios sindicales, convirtiéndose en papel mojado los proyectos de crear sindicatos controlados por el Estado

En marzo de 1976 estalla una huelga —la de la Coca Cola (Embotelladora Guatemalteca) —que representa un momento clave en la lucha de los trabajadores. Plantea la cuestión del poder de despido de la patronal (tras los temblores de tierra de 1976 los despidos salvajes son moneda corriente) y la de los derechos sindicales elementales. Esta lucha piloto cataliza un proceso de unificación sindical. Desemboca en la creación del **Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS)**, que agrupa a más de 65 sindicatos, entre ellos la Central Nacional de Trabajadores (CNT), que rompe así con sus orígenes vinculados a la Democracia Cristiana.

En noviembre de 1977, los mineros (indios) organizan una marcha de protesta hacia la capital. En septiembre de 1978, una huelga de los conductores de autobús desemboca en un levantamiento en Ciudad de Guatemala contra el aumento de los precios del transporte decretado por el gobierno (Lucas García).

A partir del 1º de Mayo de 1978, el **movimiento campesino** hace aparición en el primer plano del escenario político y social. Después de un largo trabajo

subterráneo de organización, el **Comité de Unidad Campesina (CUC)** se manifiesta públicamente. Refleja un triple esfuerzo por parte de las fuerzas revolucionarias: organizar ampliamente a los campesinos, consolidar una alianza entre los sectores ladinos e indios, y luchar contra la fragmentación de las diversas comunidades indias.

Estos campesinos no dejarán de sufrir la represión más brutal. A título simbólico, las autoridades deciden quemar vivos a decenas de campesinos de El Quiché que habían ocupado la embajada de España para protestar contra la represión militar (enero de 1980). En **febrero-marzo de 1980**, la CUC organiza una huelga nacional de los obreros del azúcar. En agosto del mismo año, entran en lucha los trabajadores de las plantaciones de plátanos de la costa atlántica.

Al mismo tiempo, otros sectores de la sociedad manifiestan su combatividad: los estudiantes y los habitantes de los barrios de chabolas se organizan en el **Movimiento Nacional de Pobladores (MONAP)**. Los Comités de base cristianos desarrollan desde 1978 un trabajo en diversos medios sociales. En el aparato de la Iglesia se perfilan las primeras figuras.

El movimiento de masas ha podido gozar de una mínima apertura muy breve. A partir de 1978, la represión más brutal trata de desarticularlo. En junio de 1980 es asesinado todo un grupo dirigente de la CNUS.

De hecho, desde hacía cierto tiempo se planteaba y discutía abiertamente la cuestión de la **clandestinidad para el movimiento de masas**. Aquí se pone de manifiesto la dificultad de combinar la utilización máxima de la mínima apertura para reforzar las organizaciones de masas y asegurar una protección efectiva de las estructuras y cuadros de estas organizaciones. Puede que el "optimismo" reinante se explique por el hecho de que el ascenso de las luchas populares a partir de 1978 venía estimulado por los avances positivos de la revolución nicaragüense y las promesas de la revolución salvadoreña.

5. La extensión del movimiento de masas en los años setenta y comienzos de los ochenta es incomprensible sin integrarla en la **actividad de las organizaciones revolucionarias, político-militares**.

Tras los golpes terribles sufridos a finales de los años sesenta, estas organizaciones han ido recuperándose poco a poco. En su mayor parte, de 1972

a 1978-79 han llevado a cabo un trabajo minucioso, clandestino, de largo alcance, para reconstituir sus fuerzas, sus aparatos, su base social.

Con una historia asimilada, han realizado una reflexión que les ha permitido superar en diversos grados las concepciones "foquistas". Predominan cuatro organizaciones político-militares: el **Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)**; las **Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)**; la **Organización del Pueblo en Armas (ORPA)**; el **Partido Guatemalteco del Trabajo -Núcleo de Dirección Nacional (PGT)**, surgido este último de una escisión del partido comunista (PGT-Comité Central) en 1978, escisión que tuvo lugar en torno a la cuestión de la lucha armada.

Han desarrollado un trabajo en regiones y sectores sociales que a menudo son muy distintos. Así, el EGP ha priorizado la implantación en las regiones con población india de El Quiché, Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango y Chimaltenango. Además está presente en la capital y la región costera. Desempeñó un papel clave en el desarrollo del CUC.

Las FAR, procedentes de las FAR de los años 60, han desarrollado un trabajo urbano significativo, en particular en el movimiento sindical y en la región costera (plantaciones). A partir de 1978 consolidan sus frentes guerrilleros en El Petén y Chimaltenango.

La ORPA sólo aparece públicamente en 1979, aunque procede de una escisión de la alianza FAR-PGT en 1971. También lleva a cabo un trabajo de integración de las masas indias y actúa —sin desarrollar una concepción efectiva de trabajo en las organizaciones de masas— en las regiones de San Marcos, Quezaltenango, Solo, Totonicopán, Huehuetenango.

El PGT realiza un trabajo urbano, en otros en el movimiento obrero.

Estas organizaciones tienen en común una concepción general de la **guerra popular revolucionaria**, que implica una integración de las fuerzas motrices sociales de la revolución en el enfrentamiento militar. Esta coincidencia general da pie, por supuesto, a muchas divergencias prácticas o teorizadas. Sin embargo, a partir de 1979 se inicia un proceso de discusión común, entre el EGP, las FAR y el PGT (la "tripartita"). En 1980, la ORPA se une a este "foro". En **enero de 1982** se firma un acuerdo de unidad de acción, que da a luz a la **Unión Revolucionaria Guatemalteca (URNG)**. Esta unidad se basa

más en una declaración de intenciones y un objetivo general que en un programa. Sin embargo, en esta coyuntura las organizaciones tendrán que hacer frente a una ofensiva contrainsurgente de gran envergadura en todos los terrenos. Para responder se precisaba de un grado de elaboración y homogeneidad estratégicas (militar y política) superiores a lo logrado hasta entonces.

Al mismo tiempo, esta unidad, que debe enfocarse a la luz del contexto regional, refleja un progreso considerable realizado por las organizaciones político-militares desde 1978. De 1979 a 1981 se muestran capaces de construir frentes militares en las tres cuartas partes del país.

De hecho, a partir de 1981 la **cuestión militar** se convierte en el nudo gordiano de la situación político-social de Guatemala en su conjunto. Las organizaciones han logrado llevar a buen puerto su trabajo de implantación social, de generalización de la lucha armada, de estimular las acciones de masas. De hecho empiezan a disputarle el terreno al enemigo de clase, a su ejército.

Sin embargo, la capacidad para encuadrar con eficacia —es decir, en consonancia relativa con las necesidades de un enfrentamiento militar sin cuartel— al movimiento de masas en las zonas urbanas y la región costera es limitada.

La fuerza de los aparatos de las organizaciones revolucionarias no compensa estas carencias. En el peor de los casos genera una tendencia a la sustitución del movimiento de masas. Además, las organizaciones se topan con un **obstáculo político**. ¿Cómo ocupar el terreno político? ¿Cómo desarrollar un frente político que le dispute al poder las capas medias de la población? ¿Cómo combinar una política de alianzas con la perspectiva de una salida político-militar? La creación del **Frente Democrático Contra la Represión (FDCR)**, en 1979, constituye un paso adelante en este terreno. Pero es más una respuesta defensiva frente a la política represiva del gobierno que un frente político ligado a los avances de la guerra popular revolucionaria. Sus carencias se revelarán muy pronto.

6. El imperialismo, las clases dominantes y el ejército han captado muy pronto los riesgos de que el proceso revolucionario se torne irreversible. A partir de 1980, el conflicto entre las clases se resume básicamente en un

choque entre la contrainsurgencia y la guerra popular revolucionaria.

La política contrainsurreccional golpea en primer lugar al movimiento de masas urbano y de la Costa, con objeto de aislar socialmente a las fuerzas revolucionarias. Trata de arrebatarle a las fuerzas revolucionarias sus bases materiales en la ciudad e impedirles la realización de acciones de sabotaje de la agroexportación. Posteriormente la contrainsurgencia concentrará sus esfuerzos en regiones clave del altiplano, para arrebatarle la iniciativa a la guerrilla.

La contrainteligencia ha sido un instrumento especialmente desarrollado para alcanzar estos objetivos. Impedir la concentración de las fuerzas revolucionarias, la coordinación de sus movimientos, la destrucción de sus líneas logísticas, constituyen así mismo los parámetros centrales de la acción del ejército.

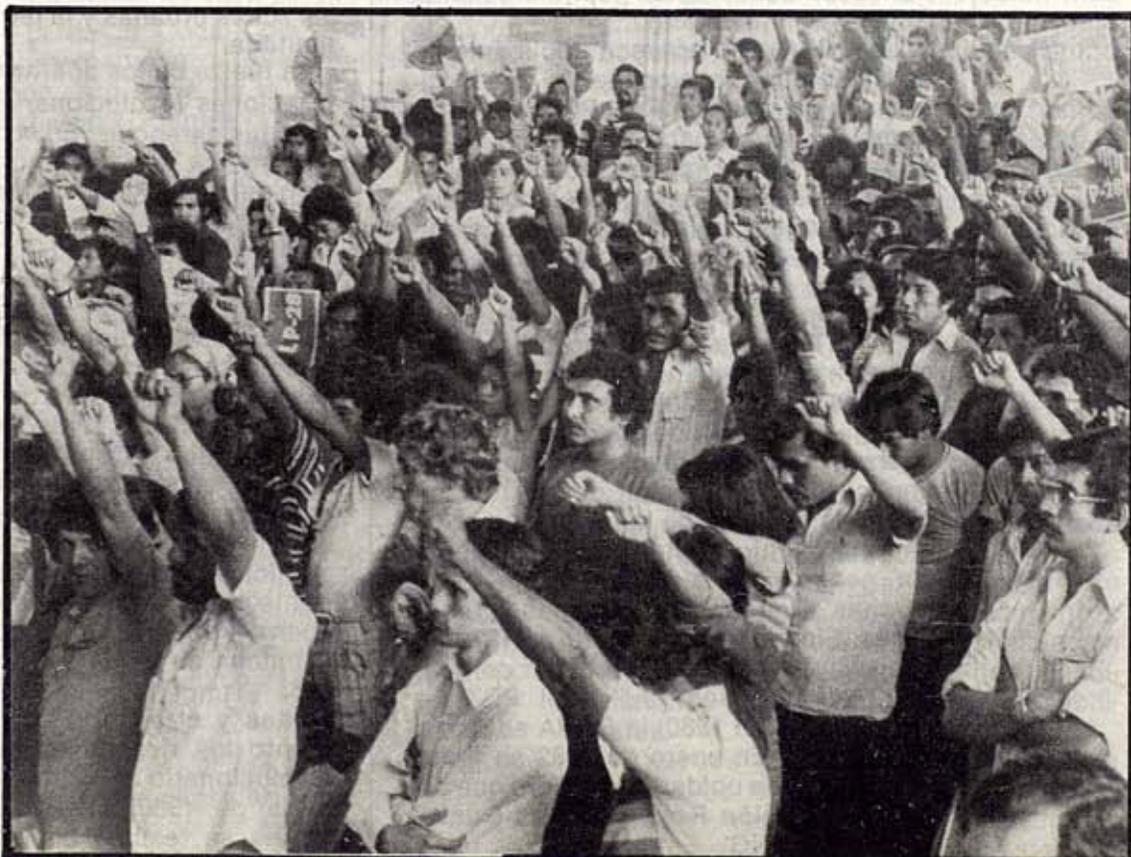
Este esfuerzo de desarticulación de los frentes revolucionarios, en primer lugar los del EGP, incluye planes de **exterminio** de la población, de su dispersión y concentración en zonas especiales ("*aldehyelas estratégicas*"), de tierra quemada (deforestación, liquidación de los cultivos indígenas). Para separar la guerrilla de su base social, el ejército contrarrevolucionario trata de **desinte-**

**grar** las comunidades indígenas, con la colaboración del imperialismo, de Israel y Taiwán—. Esta "*defensa de Occidente*" implica: 35.000 asesinatos, violaciones masivas de las mujeres indígenas, más de un millón de personas desplazadas al interior del país, decenas de miles de campesinos forzados a buscar refugio en la frontera mexicana (donde el ejército mexicano los controla de cerca), 900.000 personas enroladas en las "*patrullas civiles*", con objeto de involucrarlas en actos de contrainsurgencia y quebrarlas.

A partir de 1983, el ejército centra su ofensiva en las unidades revolucionarias, con el objetivo de liquidarlas. **No lo logrará**, lo que no sólo demuestra la solidez militar de éstas, sino también sus conquistas sociopolíticas y la profundidad de la crisis histórica que sacude al país y se refleja en las modalidades de dominación de la burguesía.

7. A pesar de no haber eliminado a las fuerzas revolucionarias, las clases dominantes y el imperialismo empezaron en 1984 una nueva fase de su plan contrarrevolucionario y antipopular.

La contrainsurgencia no se limita al aspecto militar, aunque este sea su columna vertebral. La represión y la guerra serán siempre un elemento determinante. La reorganización de las fuerzas armadas tiene por objeto



proseguir con esta guerra antipopular y dejar en manos del ejército las riendas del poder en este terreno. Pero se combina también con medidas de "reforma" social (infraestructuras, proyectos agrícolas bajo control del ejército en las zonas conflictivas, etc.) y de "reforma" política (elecciones).

Con esta contraofensiva política se trata, por un lado, de sustraerle la base política a unas fuerzas revolucionarias debilitadas, y por otro, de reorganizar el bloque dominante intentando ampliar su base política, quitando hierro a las contradicciones internas de un ejército demasiado expuesto en el frente político. Pero esta "reforma" política se inserta también en la operación diplomática de la burguesía guatemalteca y del imperialismo. Aunque pueda haber tensiones entre el imperialismo y el poder establecido, la "estabilidad" de ambos descansa en última instancia en el avance de los proyectos contrainsurreccionales a escala nacional y regional. La remodelación de las relaciones entre los EEUU y Guatemala a partir de 1983 lo indica.

Sin embargo, los proyectos contrarrevolucionarios chocan con una serie de obstáculos. La crisis económica socava los proyectos de "reforma social", por nimios que sean. Impone la continuidad de una política de austeridad insostenible para las masas populares y las capas medias en vías de depauperación.

Además, si desde 1982 las fuerzas revolucionarias han sufrido golpes **muy serios**, la **capacidad de acción** de la URNG sigue siendo un factor fundamental de la dinámica sociopolítica del país.

En el seno de las fuerzas que componen la URNG se ha iniciado un proceso de reflexión a un nivel superior: producto de la lucha a muy alto nivel contra el enemigo de clase. La crisis económica, al igual que los resultados sociales de la contrainsurgencia demuestran definitivamente la quiebra histórica de las clases dominantes. Es evidente que son las fuerzas populares y sus aliados a quien corresponde ofrecer un auténtico programa de salvación nacional, que surja como alternativa a las operaciones sin futuro de las clases dominantes.

Elaborando los elementos de este programa, operando una nueva convergencia ente la aptitud para actual militarmente de la URNG y el movimiento de masas, rearticulando la construcción de los frentes de masas (en las ciudades, la región costera e incluso en los

bastiones de la contrainsurgencia), los revolucionarios guatemaltecos harán añicos un proyecto contrarrevolucionario de lo más bárbaro, perpetrado por la clase dominante, el imperialismo y sus aliados. El diálogo político y la unidad de acción permitirán dar un salto adelante en el proceso de unificación política y elaborar respuestas tanto al desafío táctico de las elecciones como a los problemas estratégicos del trabajo de masas y de la guerra revolucionaria popular.

El porvenir de la revolución en Guatemala no puede separarse del de la revolución centroamericana. Más allá de las fluctuaciones coyunturales, el proceso iniciado en julio de 1979 en Nicaragua repercutirá inevitablemente en Guatemala, por obra de un pueblo y de militantes revolucionarios que sintetizan al máximo nivel el hecho de que la voluntad de lucha por la autodeterminación, la dignidad, la liberación social, es mucho más fuerte que todos los proyectos imperialistas. Esto cuando se materializa en organizaciones revolucionarias que han sabido mantener una continuidad y efectuar una reflexión estratégica en constante renovación, a la luz de la experiencia.

## VI. Construir un movimiento de solidaridad

La escalada de la intervención imperialista en Centroamérica ha adquirido ya las dimensiones de una auténtica guerra de agresión contra Nicaragua. Más que nunca, la solidaridad con la revolución centroamericana es una tarea central para la totalidad de la IV Internacional. Se trata de:

—prestar ayuda política y material a las luchas de liberación en la región;

—librar una batalla sistemática de información en torno a la realidad de la intervención imperialista, frente a las campañas de intoxicación de la opinión orquestadas por los medios de comunicación;

—hacer que la intervención imperialista tenga que hacer frente a más que la propia revolución centroamericana, a una potente red internacional de solidaridad, expresión viva de la trascendencia de la prueba de fuerzas que tiene lugar en la región.

Ya ahora, antes de la intervención directa y masiva de Estados Unidos, existe una solidaridad activa a escala internacional. Además, junto a los comités y colectivos unitarios que cons-

tituyen el ala activa del movimiento de solidaridad, la existencia en numerosos países de un fuerte movimiento antiguerra abre la posibilidad de ampliar cualitativamente esta solidaridad en el proceso de escalada. Finalmente, el desafío lanzado al imperialismo en su zona de influencia y el carácter mismo de la revolución sandinista, suscitan en sectores significativos de la juventud una nueva movilización internacionalista, y por primera vez desde la victoria de la revolución vietnamita, una profunda identificación con una revolución en marcha.

Estas circunstancias hacen que sea necesario y posible a la vez desarrollar un trabajo de solidaridad a un nivel superior en el próximo período.

Frente a la intensificación de las operaciones contrarrevolucionarias y gracias a los esfuerzos del FSLN en pro de una solidaridad unitaria y sin exclusivas, la defensa de la revolución nicaragüense ha conocido ya un nuevo impulso, por mucho que operaciones criminales como el minado de los puertos no hayan recibido la respuesta que se merecen.

En cambio, la solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño, que estaba en primer plano hasta mediados de 1982, pierde aliento y choca con dificultades. En primer lugar porque este trabajo, iniciado con la perspectiva de una victoria a corto plazo, ha de redefinir sus tareas en el contexto de una guerra de resistencia en la que ya participa el imperialismo; pero también en virtud de los efectos que ha tenido en el movimiento de solidaridad la crisis de las FPL.

Hoy es indispensable **ampliar la solidaridad**, vincular estrechamente la defensa de las revoluciones nicaragüense y salvadoreña en una campaña unitaria contra la intervención imperialista y por el derecho de los pueblos de América Central a determinar libremente su futuro.

La popularización de las posiciones del FMLN y del FSLN forma parte plenamente de esta campaña, sin que ello merme la autonomía política del movimiento de solidaridad con su lucha de liberación hasta la victoria.

Desde el punto de vista de la Internacional, se trata de una verdadera campaña prolongada, articulada en torno a iniciativas, que debe concretarse según las modalidades adecuadas en todos los campos de actividad de las secciones.

Los comites y colectivos unitarios

que vienen desarrollando desde hace varios años una actividad regular de solidaridad, constituyen el motor y el polo más constantes de un movimiento más amplio. Porque para que la campaña esté a la altura de lo que está en juego, es necesario ampliar, partiendo de este capital acumulado, el frente de las fuerzas comprometidas contra la intervención imperialista. Esta ampliación debe operarse en varias direcciones:

—en primer lugar y ante todo, **en dirección al movimiento obrero**, mediante el hermanamiento de empresas, las giras informativas por sectores (por ejemplo, sanidad), iniciativas materiales que impliquen a las organizaciones sindicales a escala local o de empresa. Iniciativas como el *"encuentro sindical por la paz"*, que tuvo lugar en Managua en abril de 1984, ayudarán a progresar en este sentido si llevan a propuestas concretas;

—en segundo lugar, en dirección al **movimiento antiguerra**, en la medida en que puede afirmarse de modo creciente, en el marco de las movilizaciones contra los misiles, una oposición a la guerra de agresión ya iniciada en América Central;

—finalmente, en dirección a los organismos religiosos y humanitarios, mediante campañas financieras y conferencias informativas internacionales.

Las principales actividades en torno a las que se organiza la campaña de solidaridad son:

—El esfuerzo permanente de **información** sobre la realidad de la agresión norteamericana en Nicaragua, sobre los crímenes de la contrarrevolución y los bombardeos de poblaciones civiles en El Salvador, sobre las posiciones del FSLN y del FMLN frente a los grandes problemas nacionales e internacionales que tienen que ver con su lucha.

—La organización de giras informativas, mítines, conferencias y manifestaciones; el refuerzo de la coordinación internacional de los comités daría más eficacia a estas iniciativas.

—La continuación y ampliación, más indispensables que nunca ante la situación económica creada por la guerra, de la **solidaridad material y financiera**; las iniciativas de hermanamiento entre ciudades, empresas y organizaciones, pueden ser un marco adecuado para ello.

—La continuación y el refuerzo de las **brigadas de trabajo** para Nicaragua, que cumplen al mismo tiempo una función de ayuda material y de información. Su

existencia misma constituye un precioso logro. Es la primera vez que tantos militantes de procedencia política, sindical o ideológica tan variada tienen la oportunidad de participar directamente en la experiencia de una revolución en curso y ganar con ello una convicción y una fuerza que dan vitalidad de la solidaridad.

Para la propia Internacional, la intensificación de la campaña implica:

—El refuerzo de la asunción de esta campaña por las direcciones de sección

propiamente dichas;

—Otorgar en esta campaña un lugar particular a las organizaciones juveniles en solidaridad política con la IV Internacional.

—Mejorar en nuestra prensa la información y el análisis, tanto sobre la propia situación como sobre la actividad del movimiento de solidaridad.

—Reforzar los lazos con las organizaciones revolucionarias centroamericanas. □

Enero de 1985

#### NOTA DE "LA REVOLUCION CENTROAMERICANA"

(\*) Debe hacerse un balance crítico de la posición adoptada por la IV Internacional en el XI Congreso Mundial (noviembre de 1979) en tres aspectos relacionados entre sí. El primero es el retraso en la comprensión de la naturaleza y la trayectoria del FSLN (resolución del SU de junio de 1979). Ciertamente podría decirse que esta corriente era cuantitativamente reducida y heterogénea en los años 70. En segundo lugar, la política de alianzas del FSLN, sus actos en este terreno, han sido mal comprendidos (problema de la hegemonía) y no fueron situados en el contexto de una batalla por la "unidad nacional contra Somoza", en el sentido en que la entendía el FSLN. En tercer lugar, la caracterización del Estado como capitalista después de julio de 1979, con una situación de dualidad de poder "sui generis", fue un intento de aprender las particularidades de la situación, pero era equivocado. Por consiguiente, el juicio sobre la instauración de un gobierno obrero y campesino tras una serie de mutaciones entre marzo y septiembre de 1980, confundía el proceso de consolidación del Estado obrero con el establecimiento de un gobierno obrero y campesino.

La minoría más importante en el XI Congreso Mundial afirmaba que "el gobierno obrero y campesino en Nicaragua... es semejante a los regimenes descritos por la IV Internacional que han aparecido y ejercido el poder en Cuba y en Argelia, a finales de 1963 y comienzos de 1965. Y añadía, "personalidades burguesas y pequeñoburguesas ocupan puestos de gobierno. La propiedad y el control capitalista de los principales sectores de la industria y la agricultura no han sido destruidos. Esto significa que *la naturaleza de clase del Estado permanece burguesa*". La minoría anunciaba "la prueba de fuerzas (en el sentido de la expropiación de los capitalistas) que se aproxima en los próximos meses". Según la minoría, la única diferencia en las tareas de los revolucionarios (en particular sobre el ejército) entre la Argelia de 1963-65 y Nicaragua desde julio de 1979, está en las tareas de los revolucionarios (por ejemplo, respecto al Ejército). Esto indica la falta de validez de esta caracterización que combina gobierno obrero y campesino y Estado capitalista.

Sin embargo, estos errores no han conducido a equivocaciones sobre las tareas políticas generales o sobre la actitud hacia el FSLN como dirección revolucionaria, ni tampoco en las tareas de solidaridad. □